



20161100106431

SG

Bogotá, 29-08-2016

Doctora
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
CORTE CONSTITUCIONAL
Calle 12 No. 7-65. Piso Segundo.
Bogotá, D.C.

Asunto: Escrito que descorre el traslado en incidente de nulidad contra fallo de tutela.

Referencia: Respuesta a su oficio No. OPTB-913 / 16 (recibido en la entidad el 26 de agosto de 2016, radicado interno No. 20162430123722) / Expediente No. T-5.350.275 / Magistrado Ponente: DR. JORGE IVÁN PALACIO PALACIO / Demandante o actor: HEYDER CARLOSAMA LÓPEZ.

LILIANA MARÍA ZAPATA BUSTAMANTE, persona mayor y vecina de esta ciudad, identificada como aparece al pie de mi firma, en mi condición de Secretaria General del Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación – COLCIENCIAS – y, como tal, de representante judicial de la entidad (Decreto de Nombramiento No. 2751 de 2013, Acta de Posesión No. 40 de 2013, Decreto 849 de 2016, artículo 13 y Resolución interna No. 0429 del 7 de junio de 2016), a través del presente escrito me permito descorrer el traslado otorgado en el auto de fecha 18 de agosto de 2016, dentro del proceso de la referencia, con base en los siguientes:

ANTECEDENTES:

1.- En el mes de octubre del año 2015, el señor HEYDER CARLOSAMA LÓPEZ, interpuso acción de tutela en contra de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia UPTC y el Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación – COLCIENCIAS, por la presunta vulneración de sus

Q

derechos constitucionales fundamentales a la educación y al debido proceso, en una actuación administrativa adelantada por la primera de las mencionadas, que desembocó en: 1.- La no condonación, por parte de COLCIENCIAS, de la deuda adquirida por virtud del contrato No. 063 de 2009, debido al incumplimiento de las condiciones pactadas; 2.- La declaratoria de abandono injustificado de su empleo, por parte de la UPTC; 3.- Su retiro del servicio como docente vinculado a dicha institución universitaria, por parte de la misma institución universitaria; y, 4.- La iniciación de un proceso disciplinario en su contra, también por parte su empleador (UPTC).

2.- Por reparto, el asunto correspondió al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, quien en sentencia de fecha 20 de noviembre de 2015, declaró improcedente la acción de tutela instaurada por el actor, aduciendo fundamentalmente las siguientes consideraciones:

"En el sub lite hay dos apreciaciones, la primera que existen procedimientos ordinarios para las controversias contractuales y disciplinarias a los cuales debe ceñirse la parte actora, y en el segundo, que la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia ha llevado a cabo el procedimiento legal establecido, sin que se advierta vulneración de derechos fundamentales. De éste resultaron las resoluciones número 1436 de 11 de marzo de 2005 y número 1987 del 11 de mayo de 2015, por medio de las cuales se resolvió declarar el siniestro de incumplimiento del contrato número 185-2008 suscrito por el docente Heyder Carlosama López, referente a la comisión de estudios remunerada para cursar estudios de Philosophy of Doctor in civil engineering, en la universidad de California Berkeley en los Estados Unidos, a partir del día 10 de octubre de 2014, y se resolvió no reponer esa decisión, por lo que si el accionante no se encuentra de acuerdo con esos actos administrativos puede ejercer el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, o contractual según el caso".

3.- La mencionada providencia fue objeto de revisión por parte de la Corte Constitucional, quien en la Sentencia No. T-229 del 11 de mayo de 2016, con ponencia del H. Magistrado Dr. JORGE IVÁN PALACIO PALACIO decidió:

“...Primero.- REVOCAR PARCIALMENTE el fallo proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, mediante providencia del 20 de noviembre de 2015, en la cual declaró la improcedencia de la acción de tutela de la referencia

Segundo.- TUTELAR el derecho fundamental del señor Heyder Carlosama López al debido proceso y en consecuencia ordenar la terminación inmediata del proceso disciplinario adelantando en contra del accionante, por las razones expuestas en esta providencia.

Tercero.- NEGAR la protección de los derechos fundamentales a la educación y al debido proceso en razón a: (i) la declaratoria de incumplimiento del contrato de comisión de servicio y (ii) la declaratoria de abandono de cargo por las razones expuestas en esta providencia...”.

Lo anterior por cuanto que:

“...Analizados los presupuestos fácticos de la presente tutela, se observa que es necesario que esta Corporación establezca ¿Cómo debe resolverse la tensión originada entre el deber de fomentar la ciencia y tecnología por intermedio de acuerdos de acceso a la educación superior con la obligación de cumplir de buena fe las obligaciones pactadas con una entidad estatal patrocinadora?

Igualmente, es imperioso determinar de conformidad con los principios constitucionales que rigen el derecho a la educación superior en nuestro país, si la UPTC al: (i) declarar el incumplimiento del contrato de comisión, (ii) al decretar el abandono de cargo y (iii) al iniciar un proceso disciplinario contra el señor Carlosama López Heyder vulneró su derecho fundamental al debido proceso.

Para dar respuesta a lo anterior, la Corte analizará los siguientes ejes temáticos: (i) concepto de temeridad; (ii) procedencia excepcional de la tutela para resolver controversias de tipo contractual; (iii) el rol del Estado y las universidades en el fomento de la educación, ciencia y la tecnología; (iv) el principio pacta sunt servanda a la luz de la Constitución de 1991; (v) el debido proceso en el marco de actuaciones administrativas; (vi) y por último se abordará el caso concreto.

(...)

9. Caso concreto.

Conforme con los antecedentes descritos, en el presente asunto corresponde a la Sala determinar: (i) si se presenta el fenómeno de temeridad respecto a la tutela presentada por el señor Heyder Carlosama López; (ii) si la acción de tutela es procedente en el caso concreto para lograr la protección de los derechos invocados debido a la inexistencia de otros mecanismos de defensa judicial; (iii) si la UPTC vulneró los derechos fundamentales del peticionario al declarar el incumplimiento del contrato de comisión; (iv) si al declarar el abandono de cargo e iniciar un proceso disciplinario contra el señor Carlosama López Heyder la universidad vulneró su derecho fundamental al debido proceso; (v) y por último, si la administración debe adoptar especiales medidas de protección en favor del accionante.

9.1 Temeridad en el caso concreto

La Constitución y el Decreto 2591 de 1991 imponen a los administrados la carga de actuar con transparencia y rectitud al momento de emplear todos los medios procesales que la ley ofrece para proteger y hacer efectivos sus derechos. En este sentido la conducta malintencionada, dolosa y temeraria de un sujeto procesal acarrea consecuencias jurídicas desfavorables para sus garantías fundamentales.

(...)

En este orden de ideas queda demostrado del acervo probatorio allegado al trámite de tutela que mediante sentencia de fecha 18 de febrero de 2015, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró improcedente la acción de tutela presentada por el señor Heyder Carlosama López contra la decisión adoptada por la UPTC consistente en decretar el abandono de cargo de maestro. Contra esta determinación se presentó apelación, la cual

conoció el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, la cual confirmó la decisión proferida por el juez de primera instancia.

Teniendo en cuenta lo anterior, esta Corporación debe determinar si respecto a la presente acción de tutela se presenta el fenómeno de temeridad.

Conforme lo precisó esta Corporación en sentencia T-1103 de 2005, concurre el fenómeno de temeridad cuando se presenta: (i) identidad de partes, es decir, que las acciones de tutela se dirijan contra el mismo demandado y, a su vez, sean propuestas por el mismo sujeto en su condición de persona natural, o de persona jurídica, directamente o a través de apoderado; (ii) identidad de causa petendi, o lo que es lo mismo, que el ejercicio de las acciones se fundamente en unos mismos hechos que le sirvan de causa y (iii) identidad de objeto, esto es, que las demandas busquen la satisfacción de una misma pretensión tutelar o sobre todo el amparo de un mismo derecho fundamental, se presenta el fenómeno de temeridad.

Sin embargo, conforme se explicó en la parte motiva de esta providencia cuando: (i) se presente un agravamiento de una vulneración del derecho, (ii) se evidencien eventos nuevos que aparecieron con posterioridad a la interposición de la acción, (iii) se esté en estado de ignorancia y no se actué por mala fe, (iv) se demuestre el asesoramiento errado de los profesionales del derecho o (v) la Corte Constitucional profiera una sentencia de unificación, es válido la presentación de una nueva acción de tutela, sin que se incurra en la vulneración de un derecho fundamental.

En este orden de ideas, esta Corporación considera que aunque previo a la presentación de la actual solicitud de amparo el señor Heyder Carlosama López presentó otra acción de tutela contra la UPTC, donde cuestionó la resolución número 6092 de fecha 30 de diciembre de 2014, "por la cual se declaró la vacancia de su empleo como docente por abandono de cargo", esta situación per se no impide que esta Sala de Revisión conozca de fondo la presente tutela, por cuanto la expedición de dos nuevas resoluciones en las cuales la UPTC: (i) declaró el siniestro de incumplimiento del contrato No 185-2008 suscrito por el actor y procedió a iniciar el cobro de los dineros entregados en calidad de comisión de estudios y (ii) inició la apertura de un proceso disciplinario contra el actor por su no reintegro, justifican la interposición de la acción de tutela contra estas actuaciones de la Universidad.

9.2. Procedencia de la acción de tutela en el asunto sub examine

Esta Corporación ha señalado en repetidas ocasiones¹ que, como regla general, la tutela no es el mecanismo procedente para el estudio de controversias de tipo contractual o derivadas de un contrato, ya que comúnmente los derechos que se debaten en estos litigios no entran al ámbito de conocimiento del juez de amparo. Sin embargo, excepcionalmente se ha aceptado su procedencia en la medida en que se constate la presencia de un derecho fundamental y se presente alguna de las siguientes hipótesis: (i) un inminente perjuicio irremediable y/o, (ii) la falta de idoneidad de los medios ordinarios de defensa.

(...)

¹ Acerca de la improcedencia general de la tutela en materia contractual, consultar, entre otras muchas, las Sentencias T-219 de 1995, T-605 de 1995, T-307 de 1997, T-643 de 1998, T-625 de 2001, T-971 de 2001, T-1221 de 2001, T-1341 de 2001, T-104 de 2002 y T-168 de 2003.

Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala estima que la acción de tutela presentada por el señor Heyder Carlosama López es procedente en el asunto sub examine, por cuanto:

(i) La discusión objeto de análisis tiene una evidente relevancia constitucional que merece de la intervención inmediata del juez de tutela, ya que aunque prima facie la controversia a analizar pareciera versar sobre distintos procesos de naturaleza civil y administrativa derivadas de actuaciones tales como: a) la legalidad de un acto administrativo que declaró el abandono de cargo, b) la iniciación de un proceso disciplinario y c) la declaratoria de incumplimiento de un contrato, en realidad, estas tres actuaciones tienen un mismo trasfondo que subyace a su expedición, este es, determinar si la UPTC vulneró el debido proceso del accionante al no tener en cuenta las particularidades que retrasaron la llegada del educador.

(ii) El señor Heyder Carlosama López carece de medios de defensa materialmente idóneos para lograr la protección de los derechos fundamentales presuntamente vulnerados por la universidad UPTC, ya que la duración y complejidad de las acciones ordinarias y contenciosas que formalmente existen en el ordenamiento jurídico para determinar si se generó o no incumplimiento de las relaciones contractuales postergarían por años e incluso décadas el acceso a una garantía fundamental de inmediato cumplimiento como lo es el derecho a la educación.

En este sentido, no se debe olvidar que la discusión aquí planteada no se circunscribe a un típico contrato entre una entidad y un docente, sino por el contrario, contiene una problemática de origen constitucional, por cuanto en el hipotético caso de llegarse a determinar la validez de la falta disciplinaria y de la declaratoria de insubsistencia por no reintegrarse el día estipulado, esa determinación no solo afectaría su continuidad en la universidad UPTC, sino por el contrario, fomentaría la "fuga de cerebros" de nuestro país, ya que si el señor Carlosama López Heyder queda inhabilitado en el marco de un proceso disciplinario para trabajar con el Estado, **no podría reintegrarse a ninguna entidad perteneciente al Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación y en consecuencia, también se vería afectada la condonación de la beca causada con Colciencias.** Anulando así el incentivo para regresar al país.

Por estas razones, la acción de tutela se torna en el medio eficaz para solicitar la protección de los derechos fundamentales del peticionario y su núcleo familiar, pues si bien es cierto el señor Carlosama López Heyder podría acudir a un proceso ordinario, este no pareciera ser en el caso concreto un mecanismo idóneo dado el paso del tiempo y el tipo de controversia.

9.3. Análisis de la vulneración alegada

De las pruebas allegadas al proceso se encuentra acreditado que en el asunto sub examine la controversia objeto de estudio, no gira entorno a la constitucionalidad de las cuatro decisiones adelantadas por la UPTC en contra del señor Carlosama López Heyder, sino que versan sobre la necesidad y razonabilidad respecto de las determinaciones adoptadas en virtud de la negativa del accionante de reintegrarse en la fecha estipulada a la universidad.

Teniendo en cuenta lo descrito, procede la Sala a determinar si cada una de la actuación adelantadas por la UPTC vulneraron los derechos fundamentales del tutelante.



9.3.1. Constitucionalidad de la declaración de incumplimiento contractual.

Encuentra la Sala que en el caso objeto de estudio la actuación de la UPTC consistente en declarar el incumplimiento del contrato de comisión de estudios celebrado con el señor Carlosama López Heyder no vulneró ninguno de los derechos fundamentales del accionante, a saber:

En primer lugar, no desconoció el derecho al debido proceso que rige no sólo las actuaciones contractuales, sino también la relación entre empleador y trabajador, por cuanto al expedir la resolución número 1436 del 11 de marzo de 2015, por medio de la cual la UPTC declaró el incumplimiento del contrato número 185-2008, referente a la comisión de estudios remunerada para cursar estudios de "Philosophy of Doctor in Civil Engineering", en la universidad de California Berkeley en los Estados Unidos, se garantizó el debido proceso del accionante.

Esto se evidencia de las pruebas obrantes en el expediente, específicamente de la lectura de: (i) La Resolución rectoral 2880 de 2012 "por medio de la cual se concede una Comisión de Estudios No remunerada, al profesor Heyder Carlosama Lopez", (ii) la Resolución 6092 de 2014, (iii) la Resolución 1436 de marzo de 2015 "por la cual se declara el siniestro del incumplimiento del contrato número 185-2008 suscrito por el docente Heyder Carlosama López, referente a la Comisión de Estudios remunerada para cursar estudios en Philosophy of doctor in civil Engineering, en la universidad de California – Brekeley en Estados Unidos" (iv) las respuestas electrónicas allegadas por la Universidad al docente y (v) el propio escrito de tutela del accionante.

El apoderado judicial del actor a lo largo del proceso adelantado por la universidad estructuró su estrategia defensiva bajo la siguiente premisa: Se está vulnerando el derecho a la defensa de su poderdante por cuanto la UPTC no está advirtiendo la situación de fuerza mayor en la que se encuentra el profesor Heyder Carlosama Lopez. Según los reiterados escritos presentados por el apoderado del docente, el hecho de estar terminando la tesis de doctorado en Estados Unidos puede ser considerado como justa causa para que su poderdante no retorne al país y se reintegre a su puesto de trabajo².

Sin embargo, para esta Corporación, la situación fáctica anteriormente descrita bajo ninguna circunstancia podría encajar en lo que la doctrina y la jurisprudencia han entendido como fuerza mayor.

(...)

Así las cosas, esta Corporación considera que desde la teoría de la responsabilidad por el incumplimiento de contratos, afirmar que "alguien se encuentra cursando sus estudios de doctorado", y que por razones metodológicas y de grupo no se demoró 4 años como inicialmente estaba previsto, sino 6, no puede considerarse como un hecho imprevisible e irresistible, en tanto que la demora al momento de ejecutar investigaciones como opción de grado es algo común en el área de la investigación, es decir, dicha tardanza tiene un alto grado de frecuencia.

En otras palabras, la complicación y prolongación de una investigación en el marco de un doctorado cuya culminación exige la presentación de una tesis doctoral es una variable que

² En este orden de ideas, tal y como lo reconoce el "Recurso de reposición y en subsidio apelación contra la resolución 1436 de marzo de 2015" presentado por el apoderado de Heyder Carlosama Lopez, la presunta vulneración del derecho al debido proceso se origina en la negativa de la UPTC de no dar trámite a las múltiples solicitudes presentadas en las cuales se solicitaba que se le permitiera terminar su doctorado.

los postulantes a becas deben tener en cuenta al momento de aceptar o asumir cargas financieras, ya que es un hecho sobre el cual existe una altísima probabilidad de ocurrencia. En este sentido vale la pena recordar que existe un adagio común entre los investigadores que reza lo siguiente: "un posgrado se sabe cuándo inicia pero no cuando termina".

En este orden de ideas, esta Corporación no considera que desde el punto de vista legal y constitucional la justificación aducida por el profesor Heyder Carlosama Lopez pueda ser considerada como una causal objetiva que genere en la universidad UPTC el deber de condonar la deuda asumida en razón a la comisión de estudios remunerada que con autonomía y libertad negocial se pactó.

Tampoco se debe olvidar que el accionante antes de comprometerse a adquirir responsabilidades con la universidad UPTC, tenía la carga de estructurar adecuadamente su conducta, con el fin de poder satisfacer la obligación de reintegrarse a la universidad en el término inicialmente estipulado, más aún si se tiene en cuenta que conforme a lo manifestado por el accionante en su escrito de tutela, previamente en dos oportunidades ya había sido beneficiario de una beca en la universidad de los Andes para cursar estudios de maestría en ingeniería civil y ambiental y otra beca de la Organización de los Estados Americanos, para adentrar estudios de especialización en carreteras en la Universidad Nacional de San Juan Argentina. Es decir, tenía amplia experiencia en materia de requisitos y condonaciones para acceder financiación de estudios superiores.

Es más, esta Corporación no puede pasar por alto la actitud conciliadora de la universidad UPTC, la cual desplegó y puso a disposición del profesor Heyder Carlosama Lopez varias facilidades y alternativas para que este lograra la terminación de sus estudios de Doctorado.

(...)

Así las cosas, la actitud de la universidad UPTC en ningún momento denota una vulneración a las garantías constitucionales del actor.

Ahora bien, esta Sala debe aprovechar esta oportunidad para recalcar que a pesar de la importancia que tiene la ciencia y la tecnología para nuestro país como motor de desarrollo y progreso, los becarios que son beneficiarios de recursos estatales para adelantar o en su defecto financiar la matrícula y los gastos de sostenimiento en otro país, no pueden emplear en "abstracto" este fin constitucional para incumplir las obligaciones que autónoma y voluntariamente asumieron.

Por último, esta Sala aclarará que la determinación aquí adoptada no impide que el accionante, ya no desde el punto de vista de la constitucionalidad de la medida, sino desde la legalidad de la misma, empleando el medio de control de controversias contractuales o de nulidad y restablecimiento del derecho según sea el caso, lleve ante los jueces contenciosos administrativos el debate de validez de los actos administrativos a través del procedimiento ordinario contemplado para ello.

9.3.2. Constitucionalidad de la declaración de abandono de cargo.

(...)

Así las cosas, conforme a lo expuesto puede determinarse que la comprobación física de que el empleado ha dejado de concurrir por tres (3) días consecutivos al trabajo tiene desde la óptica administrativa dos consecuencias distintas: (i) la declaratoria de abandono de cargo y (ii) la posibilidad de iniciar una actuación disciplinaria.



Sin embargo, estas dos actuaciones administrativas se estructuran bajo dos lógicas distintas, es decir, el abandono de cargo es una prerrogativa del estado que busca designar un funcionario en reemplazo del que abandonó sus tareas, para así lograr la continuidad de la prestación del servicio público, fin que no es otro al que apunta esta figura en la función pública. Es decir, es más una prerrogativa para alcanzar el adecuado funcionamiento del estado, que una penalidad o sanción a cargo del funcionario por incumplir sus obligaciones.

Ahora bien, conforme se determinó en los hechos del asunto sub examine, la UPTC declaró que el señor Heyder Carlosama López abandonó su cargo, razón por la cual optó por desvincularlo de la Universidad. Específicamente en el marco de esta actuación se expidieron dos actos administrativos a saber: (i) la resolución 5401 de 2014, "por medio del cual se da inicio a un procedimiento administrativo para la declaratoria de vacancia de un empleo público docente por presunto abandono del cargo" y (ii) la resolución 6092 de 2014 "Por la cual se declara la vacancia de un empleo público docente por abandono del cargo".

El argumento central que llevó a la UPTC a adoptar dicha determinación se basó en que: "al no existir por parte de funcionario público docente Heyder Carlosama López justa causa para no reintegrarse a sus labores docentes dentro de los tres días siguientes a la terminación de la comisión de estudios no remunerada otorgada por la universidad, conforme a lo consignado en este acto administrativo, y pese a las comunicaciones realizadas el 8 de octubre de 2014 emitida por la Oficina Jurídica de la Universidad, y del 22 de octubre de 2014 emitida por la Rectoría de la Universidad, se hace necesario declarar la vacancia del empleo del cual es titular el señor Heyder Carlosama López en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia".

Según los argumentos esbozados por el apoderado del accionante tanto en el escrito de tutela como en la solicitud de revocatoria directa, la decisión de declarar la vacancia del empleo del cual es titular el señor Heyder Carlosama López en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia vulneró el debido proceso por cuanto no tuvo en cuenta que en el asunto sub examine si existe una justa causa para no reintegrarse a su puesto de trabajo. Sobre el particular manifestó: "la norma indica de manera expresa que el abandono del cargo se produce cuando "sin justa causa" el docente no reasume sus funciones y que en este momento, si existe justa causa comprobada que le impide hacerlo y es que se encuentra culminando sus estudios en exterior, conforme se acredita con la documentación adjunta".

Ahora bien, es claro que respecto a la vulneración del debido proceso, el señor Heyder Carlosama López empleó iguales argumentos de defensa que los surtidos para cuestionar la declaratoria de incumplimiento del contrato, es decir, considera que el hecho de estar en Estados Unidos adelantado estudios de doctorado puede ser entendido como justa causa para no reintegrarse a su puesto de trabajo.

Sin embargo, este Tribunal considera que por iguales argumentos a los expuesto con anterioridad deben declararse que la UPTC no vulneró los derechos fundamentales del señor Heyder Carlosama López, ya que el estar cursando las investigaciones para finalizar la tesis de doctorado después del tiempo inicialmente pactado no puede ser una carga

³ Resolución 5401 de 2014.

que tenga que soportar indefinidamente la administración, y en esa medida, la declaratoria de abandono de cargo no se evidencia como una actuación desproporcionada o arbitraria.

Por último, esta Sala aclarará que la determinación aquí adoptada no impide que el accionante, ya no desde el punto de vista de la constitucionalidad de la medida, sino desde la legalidad de la misma, empleando el medio de control de controversias contractuales o de nulidad y restablecimiento del derecho según sea el caso, lleve ante los jueces contenciosos administrativos el debate de validez de los actos administrativos a través del procedimiento ordinario contemplado para ello.

9.3.3. Constitucionalidad de la iniciación del proceso disciplinario.

Ahora bien, en lo que respecta a la iniciación de un proceso disciplinario, esta Corporación considera que la UPTC vulneró el derecho fundamental al debido proceso, ya que al adelantar actuaciones disciplinarias contra el señor Heyder Carlosama López por el hecho de no haber regresado al país se evidencia una actuación desproporcionada y arbitraria por parte de la Universidad.

(...)

La jurisprudencia Constitucional ha manifestado que el debido proceso en el marco de actuaciones derivadas del incumplimiento de un contrato educativo o de comisión de estudios, obliga a que la administración analice en el caso concreto la proporcionalidad o la reacción institucional ante el incumplimiento.

(...)

En igual medida es claro que la proporcionalidad debe ser analizada a la hora de determinar la necesidad o no de adelantar un proceso sancionatorio o disciplinario por el incumplimiento de un contrato educativo o de comisión de estudios, ya que la equivalencia entre la acción y la respuesta del estado es un eje definitorio del debido proceso.

(...)

Teniendo en cuenta lo anterior, es claro que los operadores disciplinarios deben al momento de determinar la necesidad de adelantar o no un proceso, la proporcionalidad entre la presunta infracción y la respuesta institucional. En igual medida es claro que dependiendo de los bienes jurídicos en juego los procedimientos e incluso la justificación y razonabilidad de ciertas posturas jurídicas se flexibilizan o se endurecen dependiendo de los derechos que pueda llegar a limitar o afectar.

En este orden de ideas, es importante destacar que conforme lo manifestó el apoderado del actor, la UPTC no puede adelantar un proceso disciplinario contra el señor Heyder Carlosama López por el solo hecho de no haber regresado al país y reintegrarse a su cargo como docente. Según explica el escrito de tutela, existe una justa causa para no haber regresado a la fecha la país, consistente en que el accionante aún se encuentra terminando la tesis para obtener el título de "Philosophy of Doctor in Civil Engineering", en la universidad de California Berkeley en los Estados Unidos.

Ahora bien, aunque el debate en el asunto sub examine al igual que en las decisiones que resolvieron: (i) decretar el incumplimiento del contrato de comisión de estudios y (ii) declarar el abandono de cargo, gira en torno a si la terminación de su tesis de doctorado puede ser considerada como justa causa para que el actor no haya regresado al país, esta Corporación considera que la respuesta institucional no puede ser la misma para los tres casos. Esto en razón a que estaban en juego intereses jurídicos distintos.



En el caso del proceso adelantado para declarar el abandono de cargo tal y como se precisó con anterioridad el objeto de la declaratoria no tiene fines sancionatorios o coercitivos.

(...)

Es decir, a pesar de que la declaratoria de abandono de cargo tiene un efecto en la vinculación de una persona con la administración y por ende puede llegar a afectar el derecho al trabajo, esta prerrogativa debe observarse no desde la óptica sancionatoria, sino como una herramienta que le permite al estado evitar la paralización de los servicios que presta por la falta de remplazo de un funcionario que injustificadamente se niega a desempeñar sus funciones.

En igual medida, la declaratoria de incumplimiento contractual, más que buscar la imposición de una sanción al contratista, tiene por objeto recuperar los dineros públicos que se destinaron a sufragar un objeto contractual que no se pudo ejecutar en el plazo y tiempo previsto.

Así las cosas, la supuesta justa causa esbozada por el apoderado del señor Heyder Carlosama López, en esas dos actuaciones administrativas, al estar de por medio el interés general sobre el particular debían ser resueltas como adecuadamente finalizaron.

Sin embargo, a diferencia de las actuaciones adelantadas con el objeto de declarar el abandono de cargo del actor y de decretar el incumplimiento del contrato de comisión de estudios, esta Corporación considera que la Universidad sí debe tener como justa causa para no iniciar el proceso disciplinario contra el actor el hecho de este estar encontrándose en otro país finalizando su tesis de doctor, en primer lugar porque no se observa desde la óptica disciplinaria cómo la conducta del señor Heyder Carlosama López afectó o puso en peligro la buena marcha de la administración, así como la garantía del cumplimiento de los fines y funciones del Estado.

En igual medida, esta Corporación considera que la conducta desplegada por el señor Heyder Carlosama López fue diligente y correcta, al haber renunciado en más de tres oportunidades a su cargo con el fin de evitar la interposición de una falta disciplinaria por no haberse reintegrado a sus funciones en el término estipulado.

(...)

Es más, de las pruebas obrantes en el expediente se evidencia que el accionante buscó precisamente evitar verse abocado a un proceso disciplinario y para ello renunció en 3 oportunidades. Sin embargo, por razones que no aparecen debidamente justificadas la UPTC se negó a aceptar dichas solicitudes.

(...)

Así las cosas, esta Corporación considera que es arbitrario que la Universidad habiendo previsto el docente la presentación de su carta de renuncia para que procediera a la terminación legal de su vínculo y habiendo insistido en ella en dos (2) oportunidades, hoy lo someta a un trámite disciplinario, no solo afectando su permanencia en la institución para la cual laboraba sino afectando la posibilidad de obtener la condonación de la beca obtenida con Colciencias.

Lo anterior, por cuanto la condonación del contrato de crédito educativo número 063 de 2009, suscrito entre el actor y Colciencias, depende de que se cumpla a satisfacción con el programa de estudios, de su regreso al país, y de su vinculación a la entidad que lo presentó, en este caso la UPTC u otra entidad aprobada por Colciencias, lo que se

dificultaba en razón al proceso disciplinario adelantado..." (Subrayas y negrillas no originales).

4.- Notificada a las partes la anterior determinación, mediante escrito de fecha 26 de julio de 2016, el apoderado de la parte actora acudió a la Corte Constitucional en procura de la declaratoria de nulidad de la Sentencia No. T-229 de 2016, REITERANDO en gran medida las argumentaciones vertidas, tanto en este, como en los otros procesos de amparo de derechos fundamentales que ha venido ventilando ante la jurisdicción competente.

Concretamente, en la presente oportunidad refirió que la Corte Constitucional cambió sustancialmente la jurisprudencia expedida para el tratamiento de situaciones análogas a la suya.

En relación con este punto, el apoderado del actor aseguró que en la Sentencia T-229 de 2016 se desatendió la *ratio decidendi* de las Sentencias T-677 de 2004 y T-715 de 2014, que a su juicio incorporaron como doctrina constitucional los siguientes postulados:

- Que es constitucionalmente legítima la inversión que se desprende de los mandatos de los artículos 70 y 71 de la Constitución Política.
- Que en igual medida tiene sentido constitucional, el hecho de que se someta a los beneficiarios de tales financiamientos a una serie de requisitos y condiciones de condonación, como por ejemplo el retorno al país que le otorgó el beneficio.
- Que si bien en dicho marco el Estado cuenta con el poder exorbitante para declarar el incumplimiento del contrato, lo cierto es que cuando ejerce dicha potestad está obligado a observar las exigencias del debido proceso y a considerar el fin perseguido con la celebración del contrato, no pudiendo sacrificar dicho fin so pretexto, exclusivamente, de declarar el incumplimiento por el simple incumplimiento del requisito de vinculación a algún actor del SNCTel. En este sentido, aseguró que se encuentra proscrita toda forma de responsabilidad objetiva y que no es posible que la simple configuración de una causal de incumplimiento, haga que la entidad se decante por la no condonación del crédito otorgado, sin indagar por la culpa o el dolo del beneficiario en la conducta y sin atender a si se cumplieron o no los propósitos de la inversión en CTel; que obrar de esa manera es a todas luces un ejercicio arbitrario de la autoridad pública.

Y remató el supuesto cambio de jurisprudencia que evidencia en la Sentencia No. T-229 de 2016, con las siguientes conclusiones:



“...la sentencia objeto de solicitud de nulidad acogió en forme expresa una regla de decisión contraria a la contenida en la jurisprudencia en vigor aplicable a la materia (...) y que ha vuelto por sus cauces en un caso similar, en la Sentencia T-303 de 2016, sin que pueda sostenerse válidamente que se trata del uso de criterios jurídicos novedosos, en este caso, institutos propios del derecho privado, como la fuerza mayor o el caso fortuito, para dar una eficaz solución a circunstancias no previstas en casos anteriores, pues lo cierto es que las circunstancias, *mutatis mutandi*, son las mismas y de las cuales (sic) no puede predicarse que corresponda a una interpretación razonable y proporcionada del ordenamiento jurídico constitucional.

Como se ve, nos encontramos ante algo más que una ligera divergencia contenida en un fallo proferido por una Sala de Revisión. En la sentencia cuya nulidad se solicita, estamos ante una contradicción abierta entre lo decidido por la Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional y la formulación general de un principio, regla o razón que constituye la base de una ratio decidendi reiterada de manera constante y actual (sic) por las distintas salas de revisión, constitutivas de lo que se denomina la jurisprudencia en vigor.

Esto es, de acuerdo con la ratio decidendi del fallo objeto de solicitud de nulidad, la declaratoria del incumplimiento para intentar un cobro coactivo de los dineros, siempre ocurrirá en los casos en que el deudor no pueda liberarse de su responsabilidad. Los únicos casos en que podría hacerlo serían aquéllos en los cuales operen causales extrañas a él, tales como el caso fortuito y la fuerza mayor.

De esta manera, se impone una interpretación restrictiva que hace nugatoria la posibilidad constitucional, de acuerdo con la jurisprudencia en vigor, de declarar el incumplimiento solo “ante la imposibilidad de desarrollar el fin contractual principal, que es la reproducción del conocimiento para el fortalecimiento de la comunidad nacional, a cambio de una condonación total o parcial del crédito”.

(...)

Es así como se rompe un punto esencial de la doctrina establecida por la Corte Constitucional, al adoptar una nueva tesis frente al ejercicio de las potestades excepcionales en relación con los contratos de crédito educativo y la facultad de declarar el incumplimiento del beneficiario para poder hacer efectivo el pago de los dineros prestados. Esas potestades sólo podían ejercerse tomando en cuenta los objetivos constitucionales y de interés público de esos contratos; ahora, sin haber propuesto ante la Sala Plena de la Corte la respectiva modificación, cambio o unificación de jurisprudencia, la sentencia cuya nulidad se solicita sostiene que, a pesar de la importancia que tienen la ciencia y la tecnología para nuestro país, los becarios que son beneficiarios de recursos estatales para adelantar o en su defecto financiar la matrícula y los gastos de sostenimiento en otro país, no puede emplear en “abstracto” este fin constitucional para incumplir las obligaciones que autónoma y voluntariamente asumieron.

Nótese que la doctrina en vigor de la Corte es la de que los contratos de crédito educativo tienen un carácter público y siempre deben interpretarse a la luz del logro de las finalidades constitucionales; la sentencia cuya nulidad se solicita, en cambio, adopta una perspectiva propia del derecho privado, que hace nugatorio el mencionado logro. (se omite la cita)

Por consiguiente, al no mantenerse la jurisprudencia en vigor en el caso objeto de examen constitucional en la sentencia cuya nulidad se solicita, no se garantizó la aplicación del

principio de igualdad, seguridad jurídica, y coherencia del ordenamiento jurídico, presentándose dos posiciones distintas adoptadas por Salas de la misma jerarquía, respecto de supuestos fácticos iguales, con consecuencias jurídicas diferentes, dada la modificación sustancial del precedente, con clara vulneración del derecho al debido proceso del actor

Ahora bien, sin pretender reabrir el debate, ni reexaminar las controversias definidas en el fallo cuya nulidad se reclama, los criterios allí esbozados no corresponden a una interpretación razonable y proporcionada del ordenamiento jurídico constitucional, dado que se establece una carga absolutamente desproporcionada en la previsión de la duración de un doctorado (deber de previsión), el cual por lo demás en la sentencia T-715 de 2014, se había establecido entre 5 y 7 años, como el promedio de duración de los programas de doctorado en Estados Unidos, siendo imposible culminar un programa de doctorado en un menor tiempo.

(...)

La sentencia cuya nulidad se solicita, va en contravía de la lógica de la investigación científica pues impone al becario realizar una previsión imposible de cumplir, sobre todo en aquellos campos de alta complejidad como es el área en la cual se desempeña el actor. De habersele aplicado la doctrina establecida en las anteriores decisiones de tutela, el actor no habría tenido que enfrentar las consecuencias adversas que se le imponen en virtud de la decisión de tutela, con lo cual se rompió el principio de igualdad..." (Subrayas y negrillas no originales, remarcando estas últimas las razones concretas por las cuales, al decir del actor, la Sentencia T-229 de 2016 desatiende la ratio decidendi consignada en las Sentencias C-677 de 2004 y T-715 de 2014).

5.- Analizada la solicitud por la Corte Constitucional, mediante Auto de fecha 18 de agosto de 2016 (Expediente T-5.350.275), el Magistrado Sustanciador ordenó correr el correspondiente traslado tanto a COLCIENCIAS, como a la UPTC para que, si a bien lo tienen, procedieran a pronunciarse sobre las censuras del actor.

RAZONES DE OPOSICIÓN AL INCIDENTE FORMULADO.

Antes que nada es preciso mencionar que en los términos como fue formulado el incidente de nulidad de la Sentencia T-229 de 2016, la parte actora lo que en realidad está pretendiendo es revivir un debate judicial debidamente concluido (en varias instancias judiciales y en varias oportunidades, sin perjuicio de que la Corte se abstuviese de declarar la temeridad en la instauración de la acción de tutela de la referencia), incumpliendo con ello, aquí sí, la doctrina consolidada y constante de la Corte Constitucional en relación con la improcedencia del mecanismo escogido (el incidente), frente a lo que realmente se argumenta y se pretende (reeditar las razones esbozadas en el debate judicial de instancia, pretendiendo que la Sala Plena desatienda las consideraciones de la Sala de Revisión de Tutela, en su caso particular, es decir, rogando su actuación como si se tratase de una doble instancia respecto del fallo emanado de la respectiva Sala de Revisión).

Llegados a este punto se trae a colación el antecedente decantado por la Corte en el Auto No. 344 de 2010, de fecha 20 de octubre, en el que con ponencia del H. Magistrado Dr. HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO, expresamente señaló:

"...2. Doctrina constitucional sobre la nulidad de las sentencias proferidas por la Corte Constitucional. Reiteración de jurisprudencia.

El artículo 49 del Decreto 2067 de 1991 prevé que "contra las sentencias de la Corte Constitucional no procede recurso alguno" y que las nulidades de los procesos ante la Corte sólo podrán alegarse antes de proferido el fallo, "únicamente por violación al debido proceso". No obstante, cuando la irregularidad alegada nace de la misma sentencia, esta Corporación ha admitido la posibilidad de solicitar la nulidad de una sentencia con posterioridad a su emisión⁴.

En materia de los fallos de revisión de tutela la jurisprudencia constitucional ha considerado, de tiempo atrás, la posibilidad de declarar la nulidad de las decisiones proferidas por las Salas de Revisión, en ciertos eventos realmente excepcionales, en los cuales se constate una grave afectación al debido proceso bien sea de oficio⁵ o a solicitud de parte interesada.

No obstante lo anterior, la posibilidad de proponer un incidente de nulidad contra una sentencia proferida por la Corte Constitucional es excepcional, ya que no implica reconocer que existe "un recurso contra esta clase de providencias", ni mucho menos una nueva oportunidad para reabrir el debate o examinar controversias que ya han sido definidas⁶, en esa medida, quien solicite la nulidad de un fallo de tutela proferido por una Sala de Revisión debe dar cumplimiento de una exigente carga argumentativa, en el sentido de explicar de manera clara y expresa los preceptos constitucionales transgredidos y su incidencia en la adopción adoptada.

*Precisamente, por razones de seguridad jurídica y de garantía en la certeza del derecho, la declaratoria de nulidad de una sentencia de esta Corporación tiene características muy particulares, en virtud a que "se trata de situaciones jurídicas **especialísimas y excepcionales**, que tan sólo pueden provocar la nulidad del proceso cuando los fundamentos expuestos por quien la alega muestran, de manera **indudable y cierta** que las reglas procesales aplicables a los procesos constitucionales, que no son otras que las previstas en los decretos 2067 y 2591 de 1991, han sido quebrantadas, **con notoria y flagrante vulneración del debido proceso. Ella tiene que ser significativa y trascendental** en cuanto a la decisión adoptada, es decir, debe tener unas repercusiones sustanciales, para que la petición de nulidad pueda prosperar"⁷ (subrayado fuera de texto)"⁸*

⁴ Auto 164 de 2005.

⁵ Mediante Auto A-050 de 2000, la Corte declaró la nulidad de la Sentencia T-157 de ese mismo año, donde por un error involuntario, ante el cambio de ponencia, profirió una sentencia cuya parte motiva difería completamente de su parte resolutive.

⁶ Auto 063 de 2004.

⁷ Autos del 22 de junio de 1995 y del 18 de mayo de 2004.

⁸ Corte Constitucional, auto de 30 de abril de 2002 y Auto 031A de 2002.

En ese sentido la jurisprudencia de esta Corporación ha manifestado que quien acude en solicitud de nulidad de una sentencia proferida por una sala de revisión, debe acreditar el cumplimiento de unos requisitos de procedibilidad, además de invocar y sustentar, cualquiera de las causales de procedencia de nulidad de las sentencias específicamente señaladas por la doctrina constitucional.

2.1. Presupuestos formales que deben acreditarse para la procedencia de la solicitud de nulidad de las sentencias de tutela proferidas por las Salas de Revisión de la Corte Constitucional.

La jurisprudencia de esta Corporación ha señalado como requisitos de procedibilidad de la solicitud de nulidad de las sentencias proferidas por las Salas de Revisión de tutelas, los siguientes⁹:

(i) Que el incidente de nulidad se proponga de manera oportuna, esto es, dentro de los tres (3) días contados a partir de la notificación de la sentencia¹⁰. Si la nulidad tiene origen en un vicio anterior al fallo "sólo podrá ser alegada antes de proferido el fallo" (Art. 49 Decreto 2067 de 1991); de lo contrario, quienes hayan intervenido durante el trámite de la acción pierden, a partir de ese momento, toda legitimidad para invocarla¹¹. De la misma

⁹ Autos 217 de 2006 y 330 de 2008.

¹⁰ Sobre el plazo para interponer la solicitud de nulidad de una decisión proferida por la Corte Constitucional se afirma en el Auto 163A de 2003:

"El artículo 31 del Decreto 2591 de 1991 señala: "Dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación el fallo podrá ser impugnado por el Defensor del Pueblo, el solicitante, la autoridad pública o el representante del órgano correspondiente, sin perjuicio de su cumplimiento inmediato..."

"La Sala considera que ante la ausencia de norma legal expresa que indique el término dentro del cual se debe proponer o alegar la nulidad de cualquier sentencia proferida por esta Corporación que se origine en la misma, procede hacer uso de la aplicación analógica y aplicar el término de los tres (3) días señalado en el artículo 31 antes citado para proponer cualquier nulidad que se origine en la sentencia, por considerar además que se dan los tres (3) presupuestos básicos para acudir a la aplicación del principio de la analogía, así:

"a) Ausencia de norma que establezca el término procesal dentro del cual ha de presentarse la solicitud de nulidad de las sentencias que profiera la Corte Constitucional.

"b) Se trata de dos (2) situaciones similares en cuanto en los dos (2) eventos se ataca la decisión o sentencia que pone fin a una instancia o actuación; se refieren los dos (2) casos a situaciones de orden procesal dentro de la acción de tutela, y además se trata de actuaciones que se surten con posterioridad a la decisión de una instancia o actuación.

"c) La razón o fundamento de la existencia de un término perentorio para la presentación del escrito de impugnación del fallo es el bien jurídico fundamental y superior de la seguridad jurídica que motiva a ésta Corporación a establecer un término perentorio para la presentación de la solicitud de nulidad, como es, el determinar en forma clara y precisa la oportunidad para el ejercicio de una facultad procesal, en virtud del principio de la preclusión que orienta en forma general la actividad procesal y en aras de salvaguardar valores del derecho como la seguridad jurídica y la justicia.

¹¹ Dicho término deberá contarse a partir de la fecha en que se notifique a las partes, la sentencia respectiva. Al respecto, el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991 establece que las sentencias en que se revise una decisión de tutela deberán ser comunicadas inmediatamente al juez o tribunal competente de primera instancia, el cual notificará la sentencia de la Corte a las partes por el medio que éste considere más expedito y eficaz de conformidad con lo previsto por el artículo 16 ibidem.

"En conclusión, de conformidad con el artículo 49 del Decreto 2067 de 1991 contra sentencias de la Corte Constitucional proferidas en desarrollo de los numerales primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo y décimo del artículo 241 de la Constitución Política Colombiana, no procede recurso alguno ni solicitud de nulidad alguna. Excepcionalmente y como única excepción procede la solicitud de nulidad contra las sentencias que dicten las Salas de Revisión por irregularidades cometidas en la sentencia; y la única causal de nulidad es la violación al debido proceso: o sea del artículo 29 de la Constitución. Todas las irregularidades cometidas antes de la sentencia no pueden ser alegadas, después de producida la sentencia y quedan saneadas al ser proferida la misma.

"La solicitud de nulidad de las sentencias que profieran las Salas de Revisión de esta Corporación, debe ser presentada dentro de los tres (3) días siguientes a la notificación de la misma; acto de notificación que cumple el juez o tribunal que profirió el fallo de primera instancia; debiendo dejar constancia de la fecha de la notificación y del medio empleado y que el juez consideró más expedito y eficaz se conformidad con lo previsto en el artículo 16 del Decreto



forma, vencido en silencio el término de ejecutoria cualquier eventual nulidad queda automáticamente saneada¹².

(ii) Quien proponga el incidente de nulidad debe contar con legitimación activa para tal efecto, esto es, debe ser incoado por quien haya sido parte en el trámite del amparo constitucional o por un tercero que resulte afectado por las órdenes proferidas en sede de revisión, y,

(iii) Quien alega la existencia de una nulidad debe cumplir con una exigente carga argumentativa, en el sentido de explicar de forma clara y expresa los preceptos constitucionales transgredidos y la incidencia en la decisión proferida¹³. Lo expuesto, significa que no es suficiente el expresar razones o interpretaciones diferentes a las de la Sala que obedezcan al disgusto o inconformismo del solicitante con la decisión adoptada

2.2. Presupuestos materiales de procedencia de peticiones de nulidad de sentencias proferidas por las Salas de Revisión de la Corte Constitucional.

(...)

En este orden, adicionalmente a los requisitos formales de admisibilidad de las solicitudes de nulidad, también se han dispuesto determinadas condiciones y limitaciones a los argumentos que sean utilizados para sustentar los cargos en contra de la sentencia respectiva, los cuales adquieren una índole cualificada, pues con los mismos debe demostrarse que la afectación a este derecho constitucional fundamental por parte de la Sala de Revisión, "debe ser ostensible, probada, significativa y trascendental, es decir, que tenga repercusiones sustanciales y directas en la decisión o en sus efectos (Subraya la Corte)"¹⁴. Con base en estas circunstancias, la jurisprudencia identifica algunos casos en que la vulneración reúne esas características¹⁵, así:

(i) Cuando una sala de revisión, se aparta del criterio de interpretación o la posición jurisprudencial fijada por la Sala Plena frente a una misma situación jurídica, debido a que, el artículo 34 del Decreto 2591 de 1991, establece que los cambios de jurisprudencia deberán ser decididos por la Sala Plena de la Corte.

(ii) Cuando las decisiones no sean adoptadas por las mayorías legalmente establecidas. Esto ocurre, en los casos en que se dicta sentencia sin que haya sido aprobada por las mayorías exigidas en el Decreto 2067 de 1991, el Acuerdo No. 05 de octubre 15 de 1992 y la Ley 270 de 1996.

2591 de 1991."

Corte Constitucional, Auto del 13 de febrero de 2002. En el mismo sentido, Auto del 20 de febrero de 2002.

¹² Como lo recordó la Corte en el Auto 217 de 2006, esta afirmación se justificó, "(...) no sólo por la carencia de legitimidad para pedirla, sino, además, por las siguientes razones: (i) en primer lugar, atendiendo el principio de seguridad jurídica y de necesidad de certeza del derecho; (ii) en segundo lugar, ante la imposibilidad presentar acción de tutela contra las providencias de tutela. Y finalmente, (iii) porque es razonable establecer un término de caducidad frente a las nulidades de tutela, si incluso esa figura aplica en las acciones de inconstitucionalidad por vicios de forma." (Auto de 30 de abril de 2002 y Auto 031A de 2002).

¹³ Cfr. Autos A-62/03; A-146, A-103, A-029A y A-03A de 2002; A-256/01. Ver también los autos A-232/01, 053/01, 082/00, 050/00, 074/99, 013/99, 026"/98, 022/98, 053/97, 033/95 Y 008/93.

¹⁴ Cfr. Auto A-031/02.

¹⁵ Auto A-031/02, Auto A-162/03 y Auto A-063/04.

(iii) Cuando se presente una incongruencia entre la parte motiva y la resolutive de la sentencia, la cual genere incertidumbre respecto del alcance de la decisión proferida. Un ejemplo de ello son las decisiones anfibológicas o ininteligibles, las contradictorias o las que carecen totalmente de fundamentación en la parte motiva. Es importante precisar que los criterios utilizados para la adecuación de la sentencia, tanto de redacción, como de argumentación, no configuran violación al debido proceso. En este orden, ha manifestado la Corte que el estilo de las sentencias en cuanto puedan ser más o menos extensas en el desarrollo de la argumentación no incide en nada para una presunta nulidad.

(iv) Cuando en la parte resolutive de la sentencia se profieran órdenes a particulares que no fueron vinculados al proceso y que no tuvieron la oportunidad procesal para intervenir en su defensa, y,

(v) Cuando la Sala de Revisión desconoce la existencia de la cosa juzgada constitucional respecto de cierto asunto, caso en el cual lo que se presenta de parte de ésta es una extralimitación en el ejercicio de las competencias que le son atribuidas por la Constitución y la ley.

En este orden, las causales de procedencia de la solicitud de nulidad de las sentencias proferidas por las Salas de Revisión de esta Corte, deben ser entendidas como un trámite de creación jurisprudencial, basado en el respeto de las garantías reguladas en el artículo 29 constitucional¹⁶.

Así, la nulidad tiene naturaleza excepcional y está sometida a estrictos requisitos de procedencia, los cuales versan sobre la acreditación suficiente de circunstancias ostensibles y trascendentales que afecten de manera cierta el derecho fundamental tantas veces aludido¹⁷.

Por tanto, cualquier inconformidad con la interpretación realizada por esta Corporación, con la valoración probatoria, o con los criterios argumentativos que apoyan la sentencia, no constituyen fundamentos suficientes para solicitar su nulidad, pues esta clase de situaciones no implican la vulneración del debido proceso, sino que constituyen meras apreciaciones "connaturales al desacuerdo e inconformismo del solicitante con la decisión"¹⁸.

Debido a que en la solicitud que es objeto de análisis, se invocó la causal de nulidad de cambio de jurisprudencia, es preciso reiterar el alcance que a la misma le ha dado la doctrina constitucional.

(...)

3.3. De las causales de nulidad esgrimidas contra la sentencia T-202 de 2010.

3.3.1. Primera Causal: nulidad procesal por desconocimiento del precedente constitucional sobre procedibilidad de las acciones de tutela por parte de la sentencia T-202 de 2010

(...)

3.3.1.2. Consideraciones de la Sala

¹⁶ Auto A-217/06.

¹⁷ Auto A-060/06.

¹⁸ Pueden consultarse al respecto, entre otros, los Autos A-131/04 y A-052/06.



Recuerda la Sala que la causal de nulidad de cambio de jurisprudencia es la única expresamente señalada por las disposiciones que regulan los procedimientos ante la Corte Constitucional. En tal sentido, el artículo 34 del Decreto 2591 de 1991 establece que todo cambio de jurisprudencia debe ser decidido por la Sala Plena; en consecuencia, si una de las Salas de Revisión se apropia de dicha función se extralimita en el ejercicio de sus competencias con grave violación del debido proceso.

Pues bien, la causal de "desconocimiento de jurisprudencia" puede ser comprendida de distintas maneras: (i) como desconocimiento de una sentencia cuya ratio decidendi coincide con el problema jurídico sobre el que versa la sentencia cuya nulidad se solicita; (ii) como una contradicción con cualquier sentencia anterior, bien sea en su ratio decidendi o en su obiter dicta¹⁹; (iii) como la posibilidad de la Sala Plena de obrar como una segunda instancia de lo decidido por la Sala de Revisión.

De las anteriores concepciones la única que se ajusta al real sentido de la causal en estudio es la primera, pues tanto la segunda como la tercera manera de concebir su alcance vulneran la autonomía y la independencia judiciales de las Salas de revisión de tutela por las razones que se exponen a continuación.

Como punto de partida, resulta indispensable que los jueces constitucionales, al proferir sus fallos, los motiven conforme a las directrices jurisprudenciales previamente establecidas, de manera tal que se genere una continuidad de los criterios desarrollados por esta Corporación. Esto implica que sus decisiones posteriores deben seguir los mismos postulados de los fallos precedentes y más aún si tienen supuestos fácticos similares. En esa medida, si lo que se pretende es proceder a un cambio de interpretación jurisprudencial que obligue a una nueva hermenéutica del sistema jurídico frente a hechos ya considerados, será la Sala Plena quien estará legitimada para establecer esa nueva manera de interpretación. De tal suerte que, la procedencia de la causal de cambio de jurisprudencia está limitada a aquellos casos en los cuales se demuestre que la Sala de Revisión modificó un precedente constitucional, creado a partir de la resolución de un caso concreto, y no frente a cualquier doctrina contenida en un fallo anterior proferido por la Sala Plena²⁰.

(...)

El respeto a los precedentes constitucionales, entendidos como reglas judiciales emanadas de la interpretación de una norma superior para la solución de un caso concreto²¹, cumple funciones esenciales en los ordenamientos jurídicos, incluso en los sistemas de derecho legislado como el colombiano. Por ello, tal y como esta Corte lo ha señalado, todo tribunal, y en especial el juez constitucional, debe ser consistente con sus

¹⁹ En la sentencia SU-047 de 1999, la Corte señaló que aquella parte de las sentencias que se denomina precedente o ratio decidendi es "la formulación general... del principio, regla o razón general que constituyen la base de la decisión judicial específica. [o] si se quiere, el fundamento normativo directo de la parte resolutoria", a diferencia del obiter dictum que constituye "toda aquella reflexión adelantada por el juez al motivar su fallo, pero que no es necesaria a la decisión; [esto es, las] opiniones más o menos incidentales en la argumentación del funcionario".

²⁰ Así lo ha sostenido expresamente esta Corporación:

"De igual forma, la nulidad no concurrirá cuando la contradicción planteada esté relacionada con apartados de sentencias anteriores que no hacen parte de la razón de decisión, sino que constituyen materias adicionales que no guardan relación necesaria con la resolución del problema jurídico dado, afirmaciones que la doctrina denomina como obiter dicta" (Auto 208 de 2006).

²¹ Auto A-208 de 2006.

decisiones previas²², debido a (i) elementales consideraciones de seguridad jurídica y de coherencia del sistema jurídico; (ii) una caprichosa variación de los criterios de interpretación pone en riesgo la libertad individual, así como la estabilidad de los contratos y de las transacciones económicas, pues las personas quedan sometidas a los cambiantes criterios de los jueces, con lo cual difícilmente pueden programar autónomamente sus actividades²³; y (iii) en virtud del principio de igualdad, puesto que no es justo que casos iguales sean resueltos de manera distinta por un mismo juez. De allí que, si bien la Sala Plena puede, excepcionalmente, por razones de justicia material y adecuación de sus fallos a los cambios históricos y sociales, modificar un precedente constitucional, tal decisión le está vedada a las Salas de Revisión, so pena de incurrir en una causal de nulidad.

La Sala Plena de esta Corporación preciso el alcance de la causal de nulidad bajo estudio en los siguientes términos:

"En primer lugar, se debe estar ante una línea jurisprudencial establecida por la Corte, que constituya precedente obligatorio para las salas de revisión. Por tanto, debe concurrir para el caso concreto una "jurisprudencia en vigor, esto es, (...) en el entendido de que las decisiones anteriores han dejado tras de sí un sustrato de interpretación judicial que permite inferir criterios mínimos de alguna manera reiterados por la Corte en cuanto al alcance de las normas constitucionales aplicables en lo relativo a la solución de controversias planteadas en los mismos términos (...)"²⁴ ²⁵

El término jurisprudencia en vigor, de acuerdo con este entendimiento, corresponde al precedente constitucional fijado reiteradamente por la Corte, que en diversas decisiones trata problemas jurídicos análogos con presupuestos fácticos idénticos, frente a los cuales adopta de manera uniforme la misma regla de decisión. Sin embargo, tal necesidad de reiteración opera sin perjuicio del ejercicio de la autonomía interpretativa de la que es titular la Sala Plena de la Corte, la cual está facultada para modificar la jurisprudencia constitucional bajo la existencia de condiciones específicas, entre ellas "(i) los cambios que el Constituyente introduzca en la normatividad; (ii) la evolución que vayan mostrando los hechos de la vida en sociedad y (iii) los nuevos enfoques que promueva el desarrollo del pensamiento jurídico."²⁶ ²⁷

Entonces, incurrirá en la causal de nulidad objeto de estudio el fallo de revisión que se aparte de la "jurisprudencia en vigor" sentada por la Corporación. Este concepto de jurisprudencia en vigor guarda íntima relación con el concepto de precedente al cual ya se ha hecho alusión, que ha sido definido en un fallo de revisión de tutela bajo la siguiente perspectiva:

"26. En este sentido, y dada su importancia, surge, sin embargo, la siguiente inquietud a la hora de determinar un precedente: ¿Debe entenderse por precedente cualquier antecedente que se haya fijado en la materia, con anterioridad al caso en estudio? La respuesta a esta inquietud es negativa por varias razones. La primera, es que no todo lo

²² Ver, por ejemplo, entre otras, las sentencias T-193 de 1995 y C-400 de 1998.

²³ Sentencia SU 047 de 1999.

²⁴ [Cita Auto 208 de 2006] Auto 013 de 1997.

²⁵ [Cita Auto 208 de 2006] Cfr. Auto 131 de 2004.

²⁶ [Cita Auto 208 de 2006] Ibidem.

²⁷ Auto 208 de 2006.

Q

que dice una sentencia es pertinente para la definición de un caso posterior, como se ha visto (vgr. la ratio es diferente al obiter dicta). La segunda, es que aunque se identifique adecuadamente la ratio decidendi de una sentencia, resulta perentorio establecer para su aplicabilidad, tanto en las sentencias de constitucionalidad como en las de tutela, qué es aquello que controla la sentencia, o sea cual es el contenido específico de la ratio. En otras palabras, si aplica tal ratio decidendi para la resolución del problema jurídico en estudio o no. En este sentido, en el análisis de un caso deben confluír los siguientes elementos para establecer hasta qué punto el precedente es relevante o no:

i. En la ratio decidendi de la sentencia se encuentra una regla relacionada con el caso a resolver posteriormente²⁸.

ii. La ratio debió haber servido de base para solucionar un problema jurídico semejante, o a una cuestión constitucional semejante.

iii. Los hechos del caso o las normas juzgadas en la sentencia anterior deben ser semejantes o plantear un punto de derecho semejante al que debe resolverse posteriormente. En este sentido será razonable que "cuando en una situación similar, se observe que los hechos determinantes no concuerdan con el supuesto de hecho, el juez esté legitimado para no considerar vinculante el precedente"²⁹.

Estos tres elementos hacen que una sentencia anterior sea vinculante y, en esa medida, que se constituya en un precedente aplicable a un caso concreto. De allí que se pueda definir el precedente aplicable, como aquella sentencia anterior y pertinente cuya ratio conduce a una regla - prohibición, orden o autorización- determinante para resolver el caso, dados unos hechos y un problema jurídico, o una cuestión de constitucionalidad específica, semejantes³⁰.

En todo caso esta Corporación ha reconocido que cada Sala de revisión puede ejercer "su autonomía interpretativa y desarrollar su pensamiento jurídico racional", en cada una de las materias sometidas a su decisión, siempre y cuando, como antes se consignó, no se aparte de los precedentes sentados por la Sala Plena.

Finalmente, para poder decretar la nulidad de una sentencia es necesario que se cumplan las exigencias reiteradas y reconocidas por esta Corporación, es decir que los vicios que se invoquen impliquen una verdadera afectación del debido proceso, cuya demostración sea "ostensible, probada, significativa y trascendental, es decir, que tenga repercusiones sustanciales y directas en la decisión o en sus efectos"³¹. Conforme a lo expuesto, si se hace alusión a la causal de cambio de jurisprudencia para motivar la solicitud de impugnación de un fallo, será procedente sólo si el cambio consiste en la modificación de un precedente que se refiere a un problema jurídico concreto y no frente a cualquier argumento contenido en una decisión anterior que no fuera relevante para la decisión adoptada –obiter dicta-. De igual manera, le está vedado a la Sala Plena

²⁸ [Cita Sentencia T-292 de 2006] En la sentencia T-1317 de 2001 se hace una alusión tangencial a estas características, al señalarse que el "precedente judicial se construye a partir de los hechos de la demanda. El principio general en el cual se apoya el juez para dictar su sentencia, contenida en la ratio decidendi, está compuesta, al igual que las reglas jurídicas ordinarias, por un supuesto de hecho y una consecuencia jurídica. El supuesto de hecho define el ámbito normativo al cual es aplicable la subregla identificada por el juez".

²⁹ [Cita Sentencia T-292 de 2006] Sentencia T- 1317 de 2001.

³⁰ Sentencia T-292 de 2006.

³¹ Auto 031 A de 2002

entrar a establecer, por vía del incidente de nulidad, como si se tratase de una segunda instancia, si una determinada Sala de Revisión acertó al momento de deducir un determinado postulado interpretativo del texto constitucional por cuanto se estaría violando el principio de autonomía judicial.

No sobra advertir por último, que la exigente configuración de la causal de nulidad "desconocimiento de la jurisprudencia" no tiene ninguna incidencia en la fuerza vinculante y la obligatoriedad de los fallos de tutela proferidos por las distintas salas de revisión de esta Corporación. En efecto, tal como se ha sostenido a largo de esta providencia la casual en comento se restringe al desconocimiento de los precedentes sentados por la Sala Plena pero esto no significa que las decisiones adoptadas por las salas de revisión puedan ser incumplidas por los destinatarios de las órdenes proferidas por el juez constitucional, pues todas las decisiones adoptadas por esta Corporación tienen un carácter obligatorio y vinculante.

(...)

Al analizar la presente solicitud de nulidad concluye la Corte que no se presenta ninguna de condiciones exigidas.

En primer lugar debe resaltarse que la solicitud de nulidad no deja ver cuál es el precedente que la solicitante considera ignorado por la decisión de la Sala Octava. En el escrito presentado en tiempo –es decir, el quince (15) de junio- no se hace mención alguna a una línea jurisprudencial. Por su parte, el escrito extemporáneo cita una sentencia de otra Sala de Revisión, que no de Sala Plena.

(...)

En efecto, si se debe realizar un ejercicio complejo de asimilación o adecuación analógica de los hechos presentes a los hechos estudiados en casos anteriores, de manera que sean trasladables las razones de la decisión de un caso pasado al caso que ahora se resuelve, no se está simplemente aplicando un precedente, sino que se debe llevar a cabo todo un análisis acerca de la aplicabilidad de una específica línea jurisprudencial a una determinada situación fáctica concreta con el objeto de justificar cualquier decisión que al respecto se tome. Esto no resulta ser nada diferente al análisis que se llevó a cabo al momento de dar solución al caso en concreto, estudio que no puede repetirse con oportunidad de solucionar una solicitud de nulidad...". (Subrayas y negrillas no originales).

Pues bien, aplicados las anteriores reglas en el asunto de la referencia, tenemos que lo que pretende en realidad la parte actora, antes que la nulidad por el supuesto cambio de jurisprudencia, es una extensión de los efectos de los fallos de la Corte Constitucional, manifestados en la Sentencias No. T-677 de 2004 y T-715 de 2014 que, dicho sea de paso, interpreta a su manera en cuanto correspondería al discernimiento de la ratio decidendi de esas decisiones, para que le sean aplicados inter pares o inter communis, según corresponda, a su situación en particular, pero sin aludir a un referente jurisprudencial emanado de la Sala Plena de la Corporación, sino simplemente a dos decisiones aparentemente coincidentes, adoptadas por las Salas de Revisión número 6º y 7º, respectivamente, y sin señalar siquiera el por qué su situación resultaría homologable a la de los actores que ventilaron demandas en dichos expedientes, pues simplemente partió de la base de que todo crédito entregado por el Estado

a un particular para financiar su formación de alto nivel, debe someterse a las mismas condiciones en materia de condonación, declaratoria de incumplimiento y demás efectos legales subsiguientes.

En síntesis, lo que hace el apoderado de la parte actora en su memorial, es revivir una vez más, como se dijo, el debate judicial debida y legalmente concluido por los medios disponibles, con el agravante de que distrae la atención de la Corte señalando expresamente que no es esa su intención. Sin embargo, a lo largo del memorial lo que se expone es que la entidad no tuvo en cuenta si el contrato de marras cumplió o no con el propósito para el cual fue celebrado, predicando efectos de responsabilidad objetiva al juicio de valor efectuado por COLCIENCIAS para no acceder a la condonación en los términos solicitados por el señor HEYDER CARLOSAMA LÓPEZ, ni las condiciones particulares en que éste se encontraba para no regresar al país al retornar el conocimiento adquirido en el respectivo ejercicio académico.

En este sentido se observan en el memorial, entre otras, las siguientes argumentaciones:

*"...Ahora bien, sin pretender reabrir el debate, ni reexaminar las controversias definidas en el fallo cuya nulidad se reclama, **los criterios allí esbozados no corresponden a una interpretación razonable y proporcionada del ordenamiento jurídico constitucional, dado que se establece una carga absolutamente desproporcionada en la previsión de la duración de un doctorado (deber de previsión), el cual por lo demás en la sentencia T-715 de 2014, se había establecido entre 5 y 7 años, como el promedio de duración de los programas de doctorado en Estados Unidos, siendo imposible culminar un programa de doctorado en un menor tiempo.***

(...)

La sentencia cuya nulidad se solicita, va en contravía de la lógica de la investigación científica pues impone al becario realizar una previsión imposible de cumplir, sobre todo en aquellos campos de alta complejidad como es el área en la cual se desempeña el actor. De habersele aplicado la doctrina establecida en las anteriores decisiones de tutela, el actor no habría tenido que enfrentar las consecuencias adversas que se le imponen en virtud de la decisión de tutela, con lo cual se rompió el principio de igualdad... (Subrayas y negrillas no originales).

Pero como si lo mencionado no fuera suficiente para despachar de manera desfavorable el incidente propuesto, se tiene que contrario a lo manifestado por el apoderado de la parte actora, la ratio decidendi que él discierne a partir de las consideraciones esbozadas en las Sentencias No. T-677 de 2004 y T-715 de 2014, no es tal, pues en ninguna de éstas se dejó sentado el precepto, como doctrina constitucional, según el cual "cuando se cumplen los objetivos perseguidos con el contrato, no es necesario atender a los requisitos y exigencias previamente acordados entre el beneficiario y quien otorga el financiamiento en cuanto a las condiciones de condonación del crédito" y, es que

mal podría hacerlo, pues establecer un precedente de semejantes alcances o proporciones, a la manera de la manida fórmula de que “el fin justifica los medios empleados”, representaría en este caso un impacto supremamente negativo sobre la integridad del patrimonio público que como entidad estatal también le corresponde a COLCIENCIAS garantizar y, sobre la suficiencia de los recursos disponibles para atender la financiación de otros posibles y futuros beneficiarios, en un programa de formación de alto nivel, que además de todo implica un escenario de *quid pro quo* (colaboración y beneficio mutuo) entre el Estado que otorga el beneficio y la persona natural que lo aprovecha (lo que además de todo es una política estatal avalada no sólo por un documento CONPES, sino por las consideraciones de la Corte Constitucional plasmadas en la primera de las sentencias que se aducen como patrón de confrontación en sede del presente incidente de nulidad).

De hecho, si se revisan ambas providencias, lo que se encuentra es que la Corte sí bien alude a ese elemento, lo hace como parte del análisis respectivo, pero sin subordinarlo o excluir los demás elementos del análisis que debe rodear una decisión de condonación en particular.

Así por ejemplo en la Sentencia T-677 de 2004 (que citamos in extenso para no incurrir en la misma selección de argumentos en que cae el incidentante y que, contrario a lo que se afirma, es citada en el cuerpo de la Sentencia No. T-229 de 2016), la Corte Constitucional expresamente consideró – ratio decidendi – que:

“...8. Del caso en concreto.

(...)

8.1. Vulneración del derecho al debido proceso.

De acuerdo con lo señalado en la parte considerativa de esta Sentencia, corresponde a Colciencias determinar las condiciones para el cumplimiento de los contratos de crédito educativo que desarrollan la finalidad constitucional del fomento a la ciencia y la tecnología, y en este mismo orden, hacer uso de potestades excepcionales cuyas consecuencias han de aplicarse a quienes incumplan esos deberes contractuales de cuyo cumplimiento depende la eficacia misma del SNCYT.

En esta medida, el bien público protegido por Colciencias, esto es, la consolidación y desarrollo de la ciencia y la tecnología en el país a través de la formación de recursos humanos en el exterior, faculta a la entidad para ejercer el “poder especial de orden administrativo” con la finalidad de asegurar que la inversión en capital humano se retribuya para el desarrollo del país.

En desarrollo de lo anterior, los contratos de crédito educativo contienen potestad excepcional, ante el incumplimiento de la obligación de retornar al país y vincularse a una entidad del sistema, la cancelación de la beca-crédito, precisamente como un instrumento para asegurar que la inversión en capital humano se retribuya al país.

R

Así, en principio, estima la Sala que la sola verificación del incumplimiento es razón suficiente para que Colciencias presuma la negligencia del becario en la observancia de sus deberes contractuales y, en consecuencia, proceda a recuperar el dinero invertido en la formación del becario. Sin embargo, considera la Sala que, en los casos en los que los becarios soliciten la revisión de la decisión debido a circunstancias que, estando por fuera de su ámbito de determinación, dificultan el cumplimiento del requisito, la aplicación de la potestad y sus consecuencias, no puede hacerse de manera objetiva, sino que debe valorarse la situación concreta a fin de establecer si la culpa del incumplimiento recae o no únicamente en cabeza del becario.

En este orden de ideas, es claro que, ante la solicitud de revisión de las condiciones de la condonación, en virtud de la supuesta imposibilidad de cumplimiento de la vinculación por causas diversas a la voluntad de los becarios, Colciencias debe demostrar que el comportamiento de los becarios no fue diligente en la medida en que no aprovecharon las oportunidades, ni tomaron las precauciones y el cuidado que les correspondía.

En el caso concreto, la aplicación de la disposición contractual excepcional, mediante la cual son canceladas las condonaciones ante el incumplimiento del requisito de vinculación a una entidad del SNCYT, desconoce el derecho del debido proceso de la actora por tres razones: primero, porque la aplicación de dicha medida se efectuó sin valorar que el cumplimiento de tal requisito radica no sólo en cabeza de la becaria sino que depende, para su realización, de factores externos y de condiciones coyunturales, no siempre dependientes de su capacidad de conformación y determinación; segundo, porque no se efectuó pronunciamiento o valoración alguna de las actividades en ciencia y tecnología desarrolladas por la becaria para obtener la condonación del segundo 50% del crédito y, tercero, porque la decisión tomada con ocasión de la verificación objetiva de la no vinculación de la becaria no se corresponde con el fin buscado por las becas crédito concedidas por Colciencias, esto es, el interés público constitucional consagrado en el artículo 71 superior.

Respecto de la primera de las razones, la Sala advierte que la aplicación de la consecuencia de la potestad excepcional a la peticionaria, esto es la cancelación de la beca-crédito, se realizó a título de responsabilidad objetiva que, por regla general, está proscribida de nuestro régimen constitucional (art. 29 C.P.). En efecto, la aplicación aludida se efectuó ante la sola verificación de la no vinculación de la actora a una entidad del SNCYT durante el periodo de gracia, en desconocimiento de las razones expresadas por la becaria en diferentes comunicaciones enviadas a la entidad demandada con el fin de que se reconsiderara la decisión.

En relación con lo anterior, sea lo primero advertir cómo en ciertos casos la posibilidad de dar cumplimiento a la disposición contractual depende no sólo de la diligencia de los becarios para vincularse a una entidad del SNCYT, sino de condiciones a priori que, o dependen de Colciencias – como el diseño de una política clara que regule el retorno de los becarios y su vinculación al Sistema-, o están por fuera de las posibilidades de determinación de esta entidad, dificultando enormemente el cumplimiento del requisito – como por ejemplo la disminución del presupuesto y la difícil situación de vinculación laboral en las entidades de investigación del país-

(...)

En este orden de cosas, la valoración del cumplimiento de los requisitos por parte de los becarios que solicitan la revisión de la condición del regreso aduciendo razones ajenas a su voluntad, hace necesario evaluar cada caso concreto a la hora de determinar la

aplicación de la cláusula sexta del contrato de crédito educativo o la consideración de una solución diferente que permita conciliar el posible comportamiento contractual diligente del becario con las finalidades del SNCYT.

(...)

Respecto de la ausencia de valoración de las acciones de fomento de la ciencia colombiana adelantadas por la becaria, como segunda causal del actuar violatorio del derecho del debido de la peticionaria y desproporcionado de la entidad demandada, la Sala encuentra que, de acuerdo con las comunicaciones del 5 de junio de 2003, que informa a la accionante sobre la cancelación de la beca – crédito, y del 11 de julio del mismo año que ratifica la primera, Colciencias no se pronunció acerca de las siguientes actuaciones de la becaria que desarrollan claramente el objetivo constitucional del fomento a la ciencia y la tecnología en el marco de la globalización, la consolidación de redes internacionales y la divulgación y apropiación social del conocimiento

(...)

No entiende entonces la Sala la negativa de la entidad demandada de revisar los aspectos reseñados, al momento de tomar la determinación de cancelar la condición de becaria de la peticionaria, y de comunicársela a la misma, teniendo en cuenta que, de acuerdo a lo señalado en los considerandos de este fallo, los contratos de beca – crédito están orientados directamente a promover y solidificar el tipo de actividades que la becaria está realizando en desarrollo de la finalidad constitucional del fomento a la ciencia y la tecnología, en un contexto en donde la globalización de la ciencia y las necesidades imperiosas de socializar el conocimiento implican una valoración cuidadosa de los recursos humanos con que cuenta el país.

Al respecto podría pensarse que, ante el incumplimiento del requisito de vinculación a una entidad del SNCYT, no sería necesario evaluar el actuar de la becaria en desarrollo del fomento de la ciencia y la tecnología, toda vez que el reglamento de condonación establece que ante el incumplimiento de cualquiera de los tres requisitos estipulados para obtener el primer 50% de condonación – esto es, la culminación exitosa del programa de estudio, el retorno y la vinculación a una entidad del SNCYT, debe reintegrarse la totalidad del monto girado, como lo indica el reglamento de condonación:

(...)

Sin embargo, en la medida en que esta condición contractual hace inescindibles los requisitos para obtener los porcentajes de condonación - ya que la valoración de las actividades y logros en ciencia y tecnología de la becaria depende de que previamente se haya dado cumplimiento a la culminación del programa, al retorno y a la vinculación laboral a una entidad del SNCYT -, la negativa a realizar tal valoración y a pronunciarse sobre ella, bajo el argumento de la verificación meramente objetiva del incumplimiento del requisito de la vinculación, resulta abiertamente desproporcionada y en consecuencia, inconstitucional.

(...)

Al respecto, debe precisarse que el desarrollo de las actividades mencionadas no configura por sí solo el cumplimiento, por equivalencia, de los primeros requisitos para obtener la condonación del primer 50% del crédito. En esta medida, el sólo desarrollo de actividades y logros en ciencia y tecnología, no pueden ser causa suficiente para la condonación del crédito.

Sin embargo, en la medida en que dichas actividades son inescindibles del cumplimiento de los primeros tres requisitos y desempeñan el mismo fin constitucional al desarrollar actividades indispensables para la consolidación y promoción de la ciencia y tecnología nacionales, no pueden ser desconocidas al momento de tomar una decisión que afecta no

sólo los intereses de la becaria, sino los de todo el sistema de ciencia y tecnología, so pena de que la decisión sea desproporcionada respecto del objeto de contrato de beca-crédito y del derecho al debido proceso de la becaria, el cual es vulnerado cuando el comportamiento contractual de la peticionaria es valorado bajo los parámetros de la responsabilidad objetiva.

(...)

Así, Colciencias podrá tener en cuenta diferentes criterios de los cuales, esta Sala resalta los siguientes: i) estado de la oferta de trabajo en el área de desempeño y preparación de la actora, esto es biología molecular; ii) causales del incumplimiento alegadas por la accionante y valoración de su grado, en atención a su diligencia en la búsqueda de vinculación laboral y al contexto del estado de la ciencia y la tecnología en el país; y iii) dimensión del perjuicio que causa a la ciencia y la tecnología, la pérdida del contacto con la becaria, tomando en consideración la incidencia de sus actividades en el país, tanto en la sociedad en general, como en la comunidad científica en particular...". (Subrayas y negrillas no originales, que intencionalmente marcan los argumentos de la Corte en función de los cuales es posible concluir, efectivamente, que la condonación no depende solamente de que se cumpla o no el fin público perseguido con el contrato)

En tanto que respecto de la Sentencia No. T-715 de 2014, no es posible extender la ratio decidendi a la situación que ahora nos ocupa (que ciertamente replica el argumento según el cual, en este tipo de decisiones administrativas debe indagarse **adicionalmente**³² el real beneficio o contribución que el correspondiente proyecto de investigación represente para el país en materia de ciencia, tecnología e innovación, pero que no señala en modo alguno que ese requisito descarte el análisis necesario sobre el cumplimiento de los demás requisitos que se hayan previsto en las condiciones de condonación), pues lo accionantes en ambos casos no se encuentran en idéntica situación de hecho; así, mientras en el sub judice el actor no cumplió con las condiciones de condonación en cuanto a su retorno al país y a su vinculación con una de las entidades del SNCTel, pues renunció de manera voluntaria a su vinculación con la UPTC alegando que se debía aceptar sin más su argumento sobre la duración promedio de su programa académico, en el decidido a través de la citada sentencia, "...(i) la peticionaria regresó al país en la fecha acordada posteriormente (30 de octubre de 2006), (ii) se vinculó nuevamente a la institución, (iii) realizó su proyecto de investigación con la entidad, (iv) le compartió los respectivos créditos y se lucró con los resultados de dicha investigación, y (v) culminó su doctorado en el año 2010...". (Subrayas no originales), lo que de entrada rompe con cualquier patrón de asimilación respecto de la situación de la parte actora, pues en su caso particular, precisamente, la condición de retorno al país en las fechas establecidas no se cumplió, a pesar de que le resultaba muy sencillo acreditar su vinculación con una de las entidades del SNCTel, en este caso, la UPTC a la que estaba vinculado, con el

³² No EXCLUSIVAMENTE, como pretende el apoderado del actor.

consecuente efecto de eludir las demás consecuencias legales y contractuales derivadas de su desatención de las condiciones pactadas voluntariamente por las partes intervinientes en los respectivos negocios jurídicos.

Y es que no es posible concluir sin hesitación alguna, como lo hace el apoderado de la parte actora, que la decisión de COLCIENCIAS en su caso particular, corresponde a un esquema de responsabilidad objetiva cuando, contrario a su percepción, en la Sentencia No. T-229 de 2016, la Corte Constitucional sí se ocupó expresamente de indagar y derivar las consecuencias de la conducta incumplida, motu proprio, por el mismo beneficiario. Así, en las consideraciones del fallo en relación con este punto, que nos permitimos reiterar en el escrito, expresamente se indicó que:

"...9. Caso concreto.

Conforme con los antecedentes descritos, en el presente asunto corresponde a la Sala determinar: (i) si se presenta el fenómeno de temeridad respecto a la tutela presentada por el señor Heyder Carlosama López; (ii) si la acción de tutela es procedente en el caso concreto para lograr la protección de los derechos invocados debido a la inexistencia de otros mecanismos de defensa judicial; (iii) si la UPTC vulneró los derechos fundamentales del peticionario al declarar el incumplimiento del contrato de comisión; (iv) si al declarar el abandono de cargo e iniciar un proceso disciplinario contra el señor Carlosama López Heyder la universidad vulneró su derecho fundamental al debido proceso; (v) y por último, si la administración debe adoptar especiales medidas de protección en favor del accionante.

(...)

En este sentido, no se debe olvidar que la discusión aquí planteada no se circunscribe a un típico contrato entre una entidad y un docente, sino por el contrario, contiene una problemática de origen constitucional, por cuanto en el hipotético caso de llegarse a determinar la validez de la falta disciplinaria y de la declaratoria de insubsistencia por no reintegrarse el día estipulado, esa determinación no solo afectaría su continuidad en la universidad UPTC, sino por el contrario, fomentaría la "fuga de cerebros" de nuestro país, ya que si el señor Carlosama López Heyder queda inhabilitado en el marco de un proceso disciplinario para trabajar con el Estado, no podría reintegrarse a ninguna entidad perteneciente al Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación y en consecuencia, también se vería afectada la condonación de la beca causada con Colciencias. Anulando así el incentivo para regresar al país.

(...)

9.3. Análisis de la vulneración alegada

De las pruebas allegadas al proceso se encuentra acreditado que en el asunto sub examine la controversia objeto de estudio, no gira entorno a la constitucionalidad de las cuatro decisiones adelantadas por la UPTC en contra del señor Carlosama López Heyder, sino que versan sobre la necesidad y razonabilidad respecto de las determinaciones adoptadas en virtud de la negativa del accionante de reintegrarse en la fecha estipulada a la universidad.



Teniendo en cuenta lo descrito, procede la Sala a determinar si cada una de las actuaciones adelantadas por la UPTC vulneraron los derechos fundamentales del tutelante.

9.3.1. Constitucionalidad de la declaración de incumplimiento contractual.

Encuentra la Sala que en el caso objeto de estudio la actuación de la UPTC consistente en declarar el incumplimiento del contrato de comisión de estudios celebrado con el señor Carlosama López Heyder no vulneró ninguno de los derechos fundamentales del accionante, a saber:

En primer lugar, no desconoció el derecho al debido proceso que rige no sólo las actuaciones contractuales, sino también la relación entre empleador y trabajador, por cuanto al expedir la resolución número 1436 del 11 de marzo de 2015, por medio de la cual la UPTC declaró el incumplimiento del contrato número 185-2008, referente a la comisión de estudios remunerada para cursar estudios de "Philosophy of Doctor in Civil Engineering", en la universidad de California Berkeley en los Estados Unidos, se garantizó el debido proceso del accionante.

Esto se evidencia de las pruebas obrantes en el expediente, específicamente de la lectura de: (i) La Resolución rectoral 2880 de 2012 "por medio de la cual se concede una Comisión de Estudios No remunerada, al profesor Heyder Carlosama Lopez", (ii) la Resolución 6092 de 2014, (iii) la Resolución 1436 de marzo de 2015 "por la cual se declara el siniestro del incumplimiento del contrato número 185-2008 suscrito por el docente Heyder Carlosama López, referente a la Comisión de Estudios remunerada para cursar estudios en Philosophy of doctor in civil Engineering, en la universidad de California – Brekeley en Estados Unidos" (iv) las respuestas electrónicas allegadas por la Universidad al docente y (v) el propio escrito de tutela del accionante.

El apoderado judicial del actor a lo largo del proceso adelantado por la universidad estructuró su estrategia defensiva bajo la siguiente premisa: Se está vulnerando el derecho a la defensa de su poderdante por cuanto la UPTC no está advirtiendo la situación de fuerza mayor en la que se encuentra el profesor Heyder Carlosama Lopez. Según los reiterados escritos presentados por el apoderado del docente, el hecho de estar terminando la tesis de doctorado en Estados Unidos puede ser considerado como justa causa para que su poderdante no retorne al país y se reintegre a su puesto de trabajo³³.

Sin embargo, para esta Corporación, la situación fáctica anteriormente descrita bajo ninguna circunstancia podría encajar en lo que la doctrina y la jurisprudencia han entendido como fuerza mayor.

(...)

Así las cosas, esta Corporación considera que desde la teoría de la responsabilidad por el incumplimiento de contratos, afirmar que "alguien se encuentra cursando sus estudios de doctorado", y que por razones metodológicas y de grupo no se demoró 4 años como inicialmente estaba previsto, sino 6, no puede considerarse como un hecho imprevisible e irresistible, en tanto que la demora al momento de ejecutar investigaciones como opción de

³³ En este orden de ideas, tal y como lo reconoce el "Recurso de reposición y en subsidio apelación contra la resolución 1436 de marzo de 2015" presentado por el apoderado de Heyder Carlosama Lopez, la presunta vulneración del derecho al debido proceso se origina en la negativa de la UPTC de no dar trámite a las múltiples solicitudes presentadas en las cuales se solicitaba que se le permitiera terminar su doctorado.

grado es algo común en el área de la investigación, es decir, dicha tardanza tiene un alto grado de frecuencia.

En otras palabras, la complicación y prolongación de una investigación en el marco de un doctorado cuya culminación exige la presentación de una tesis doctoral es una variable que los postulantes a becas deben tener en cuenta al momento de aceptar o asumir cargas financieras, ya que es un hecho sobre el cual existe una altísima probabilidad de ocurrencia. En este sentido vale la pena recordar que existe un adagio común entre los investigadores que reza lo siguiente: "un posgrado se sabe cuándo inicia pero no cuando termina".

En este orden de ideas, esta Corporación no considera que desde el punto de vista legal y constitucional la justificación aducida por el profesor Heyder Carlosama Lopez pueda ser considerada como una causal objetiva que genere en la universidad UPTC el deber de condonar la deuda asumida en razón a la comisión de estudios remunerada que con autonomía y libertad negocial se pactó.

Tampoco se debe olvidar que el accionante antes de comprometerse a adquirir responsabilidades con la universidad UPTC, tenía la carga de estructurar adecuadamente su conducta, con el fin de poder satisfacer la obligación de reintegrarse a la universidad en el término inicialmente estipulado, **más aún si se tiene en cuenta que conforme a lo manifestado por el accionante en su escrito de tutela, previamente en dos oportunidades ya había sido beneficiario de una beca en la universidad de los Andes para cursar estudios de maestría en ingeniería civil y ambiental y otra beca de la Organización de los Estados Americanos, para adentrar estudios de especialización en carreteras en la Universidad Nacional de San Juan Argentina. Es decir, tenía amplia experiencia en materia de requisitos y condonaciones para acceder financiación de estudios superiores.**

Es más, esta Corporación no puede pasar por alto la actitud conciliadora de la universidad UPTC, la cual desplegó y puso a disposición del profesor Heyder Carlosama Lopez varias facilidades y alternativas para que este lograra la terminación de sus estudios de Doctorado, entre las que se destacan:

(i) La resolución rectoral 2880 de 2012, mediante la cual se le concedió una nueva comisión académica entre las fechas 7 de julio de 2013 y el 6 de octubre del mismo año a pesar del vencimiento del plazo inicial para finalizar los estudios doctorales.

(ii) La expedición del acuerdo 034 del 27 de septiembre de 2013, por medio del cual se le otorgó comisión de estudios no remunerada al docente Heyder Carlosama López entre el 7 de octubre de 2013 y el 6 de octubre de 2014, con el fin de culminar sus estudios de Philosophy of Doctor in civil Engineering en la Universidad de Berkeley.

(iii) La posibilidad de que el señor Heyder Carlosama López se acogiera al acuerdo 046 de 2012, el cual establece que los docentes que se encuentran en comisión de estudios podrán "presentar el título objeto de la comisión, dentro de los 24 meses siguientes a la fecha de reintegro". Basado en lo anterior, si el actor se hubiera reintegrado a sus labores en la fecha que se le indicó podía haber hecho uso de los 24 meses que indica el referido acuerdo, es decir, que la fecha de entrega del título sería para el 10 de octubre del año 2016.

2



Así las cosas, la actitud de la universidad UPTC en ningún momento denota una vulneración a las garantías constitucionales del actor.

Ahora bien, esta Sala debe aprovechar esta oportunidad para recalcar que a pesar de la importancia que tiene la ciencia y la tecnología para nuestro país como motor de desarrollo y progreso, los becarios que son beneficiarios de recursos estatales para adelantar o en su defecto financiar la matrícula y los gastos de sostenimiento en otro país, no pueden emplear en “abstracto” este fin constitucional para incumplir las obligaciones que autónoma y voluntariamente asumieron.

(...)

Ahora bien, es claro que respecto a la vulneración del debido proceso, el señor Heyder Carlosama López empleó iguales argumentos de defensa que los surtidos para cuestionar la declaratoria de incumplimiento del contrato, es decir, considera que el hecho de estar en Estados Unidos adelantado estudios de doctorado puede ser entendido como justa causa para no reintegrarse a su puesto de trabajo.

Sin embargo, este Tribunal considera que por iguales argumentos a los expuesto con anterioridad deben declararse que la UPTC **no vulneró los derechos fundamentales del señor Heyder Carlosama López, ya que el estar cursando las investigaciones para finalizar la tesis de doctorado después del tiempo inicialmente pactado no puede ser una carga que tenga que soportar indefinidamente la administración, y en esa medida, la declaratoria de abandono de cargo no se evidencia como una actuación desproporcionada o arbitraria...** (Subrayas y negrillas no originales)

De manera pues que, contrario a lo que se afirma apodícticamente en el incidente de nulidad, lo cierto es que en el caso en estudio tanto la UPTC como COLCIENCIAS fueron incluso más allá en la indagación de las causas subjetivas por las cuales el señor HEYDER CARLOSAMA LÓPEZ decidió voluntariamente, tanto abstenerse del cumplimiento de las condiciones de condonación libremente convenidas con su contraparte (nadie lo obligó a acceder a la suscripción del título jurídico), como a desvincularse de la institución universitaria a la cual pertenecía, quien además de todo tuvo la deferencia de tratar de ofrecerle herramientas y caminos que éste mismo decidió rechazar, simplemente asumiendo que se debían validar por sí y ante sí, las explicaciones brindadas en relación con sus propias decisiones, en lo que es necesario insistir en que la simple inconformidad respecto de una decisión adoptada por la administración pública, no la convierte *prima facie* en un pronunciamiento que desatienda la prohibición de responsabilidad objetiva que entroniza la Carta de 1991.

Insistimos, no existe regla jurisprudencial alguna en las sentencias de tutela que se citan como parámetro de control en el incidente de nulidad de la Sentencia No. T-229 de 2016, o incluso de la propia Corte Suprema de Justicia o del Consejo de Estado, que desdibujen el esquema del incumplimiento de los contratos celebrados con cargo a recursos públicos (estén o no sometidos al Estatuto de Contratación Estatal) es decir que, si bien es cierto que con éstos se persigue un fin de interés público, esa circunstancia no basta por sí sola para

exonerar a los beneficiarios de las demás condiciones pactadas de manera voluntaria con su contraparte en tales negocios jurídicos, pues ello, como se apuntó en líneas anteriores, en la práctica equivale a justificar los medios en función del fin perseguido, lo que naturalmente no es una doctrina auspiciada por las altas cortes, sino una interpretación subjetiva y particular del apoderado de la parte actora, hoy incidentante.

PETICIONES y/o SOLICITUDES EN RELACIÓN CON EL TRÁMITE:

Atendiendo a las consideraciones plasmadas a lo largo de este escrito, solicitamos respetuosamente de la Sala Plena de la Honorable Corte Constitucional, lo siguiente:

1.- Declarar extemporáneo el incidente de nulidad propuesto por el apoderado de la parte actora en contra de la Sentencia No. T-229 de 2016, toda vez que fue instaurado, al parecer, más allá de los tres (3) días señalados por el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991 (término que en realidad corresponde al de la impugnación de la providencia, pero que se aplica en extensión analógica al incidente de nulidad en virtud de lo considerado en el Auto 103A de 2003, proferido por la Corte Constitucional).

Ello por cuanto que, mientras el fallo pretendidamente nulo data del 11 de mayo de 2016, el memorial contentivo del incidente de nulidad fue radicado formalmente ante la Corte el día 26 de julio de esa misma anualidad, es decir, más de dos (2) meses después de producirse la decisión judicial, con el agravante de que el apoderado de la parte actora es quien decide desde cuando se da por enterado de la decisión y no la actuación procesal, según su cauce ordinario y teniendo en cuenta, además, que la decisión contenida en la Sentencia No. T-229 de 2016 fue de amplia difusión en medios nacionales de prensa y radio.

2.- En caso de que la anterior solicitud no sea despachada favorablemente por la Corte, respetuosamente solicitamos la negatoria absoluta del incidente de nulidad propuesto, toda vez que no se cumplen ni los presupuestos materiales, ni los requisitos formales para que la Corporación proceda de esa manera, según el análisis consignado en el acápite de **"RAZONES DE OPOSICIÓN AL INCIDENTE FORMULADO."**

3.- De la misma manera y en caso de la Sala Plena de la Honorable Corte Constitucional avale las razones de la oposición presentadas por el departamento administrativo, comedidamente le solicitamos a dicha Corporación que estudie la conducta del profesional del derecho que apodera al señor



COLCIENCIAS

**TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**

PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

HEYDER CARLOSAMA LÓPEZ, con miras a determinar su posible temeridad, pues a nuestro juicio es evidente que lo pretendido es revivir el debate judicial concluido en la instancia, utilizando impropiamente y a sabiendas el mecanismo de la nulidad de los fallos, es decir, formulando argumentaciones y utilizando mecanismos judiciales manifiestamente improcedentes frente al caso concreto, conducta que se ha mantenido a lo largo de todos los debates judiciales promovidos (el presente no es la excepción), pues es un hecho de fácil comprobación que se han instaurado varias acciones de tutela por los mismos hechos o por hechos asimilables y que la actitud del mencionado profesional del derecho no es otra que pretender que se avale su interpretación particular del caso sub judice de manera necesaria, o, lo que es lo mismo, que no está dispuesto a que sus razones sean desoídas, abusando incluso de los mecanismos previstos en las normas respectivas para impugnar las decisiones adoptadas de manera autónoma por los jueces de la República.

PRUEBAS:

Respetuosamente solicito a la Sala Plena de la Corte tener como tales, asignándoles el valor que en derecho corresponda, las pruebas documentales incorporadas al expediente de tutela No. T-5.350.275, adicional a lo cual me permito aportar en copia simple a la actuación los documentos que acreditan las condiciones con las cuales acudo a la Corte Constitucional oponiéndome al incidente propuesto por la parte actora. (4 folios útiles).

NOTIFICACIONES:

El Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación las recibirá en la Carrera 7 B Bis No. 132-28 de la ciudad de Bogotá, D.C., o, en su defecto, de manera electrónica en la dirección de correo institucional: notificacionesjudiciales@colciencias.gov.co

De los honorables Magistrados,

Cordial y respetuosamente,


LILIANA MARIA ZAPATA BUSTAMANTE
Secretaria General COLCIENCIAS
CC: 42.989.796

Elaborado por: SME/A.

Carrera 7 B bis N° 132-28
Teléfono: (57-1) 625 8480
Fax: (57-1) 625 1788
Bogotá D.C. - Colombia
www.colciencias.gov.co



DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION-COLCIENCIAS-

DECRETO NÚMERO 2751 DE 2013

24 NOV 2013

Por el cual se hace un nombramiento ordinario en un cargo de libre nombramiento y remoción

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial de las que le confiere el numeral 13 del artículo 189 de la Constitución Política de Colombia

DECRETA

ARTICULO PRIMERO. Nombrar a la doctora LILIANA MARÍA ZAPATA BUSTAMANTE, identificada con cédula de ciudadanía No.42.898.796 de Envigado, Antioquia, en el cargo de Secretario General, Código 0035, Grado 22, del Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e innovación-Colciencias.

ARTICULO TERCERO. El presente Decreto rige a partir de la fecha de su expedición y surte efectos fiscales a partir de la posesión en el respectivo empleo.

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dado en Bogotá D.C., a los

24 NOV 2013

LA DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION- COLCIENCIAS

PAULA MARCELA ARIAS PULGARÍN



PROSPERIDAD
PARA TODOS

ACTA DE POSESION No. 40 DE 2013

En Bogotá, D.C. el 26 de noviembre de 2013, se presentó la doctora LILIANA MARÍA ZAPATA BUSTAMANTE, identificada con cédula de ciudadanía No.42.898.796 de Envigado, Antioquia, para tomar posesión del cargo de Secretario General, Código 0035, Grado 22 del Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación-Colciencias-, que tiene una signación básica mensual de \$6.778.682, para el cual fue nombrada mediante Decreto No. 2751 de noviembre 24 de 2013.

La Directora le tomó el juramento de rigor, por cuya gravedad el compareciente prometió cumplir y hacer cumplir la Constitución Política y las leyes de la República de Colombia y desempeñar fielmente los deberes del cargo.

EL POSESIONADO

LA DIRECTORA GENERAL

Preparó: L. Zapata
Revisó: Alexander Casasas M.

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 42.898.796

ZAPATA BUSTAMANTE

APELLIDOS

LILIANA MARIA

NOMBRES

[Handwritten signature]



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 12-FEB-1968

MEDELLIN
(ANTIOQUIA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.70

ESTATURA

A+

G.S. RH

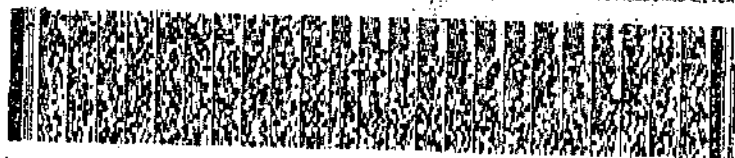
F

SEXO

27-ABR-1987 ENVIGADO

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARSEL SANCHEZ TORRES



A-1500100-00011102-F-0042898796-20060604

0000375446A 1

1690013125

0429

RESOLUCIÓN No. _____ de 2016

07 JUN 2016

"Por medio de la cual se deroga la Resolución N° 396 de 2015 y se adoptan otras determinaciones en materia de gestión contractual, administrativa, financiera, presupuestal y del talento humano"

La Directora del Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación -COLCIENCIAS-, en uso de sus facultades constitucionales y legales, especialmente las conferidas en los artículos 11 y 12 de la Ley 80 de 1993, concordantes con los artículos 9 al 12 de la Ley 489 de 1998, y

CONSIDERANDO

Que el artículo 211 de la Constitución Política de Colombia establece que la Ley fijará las condiciones para que las autoridades administrativas puedan delegar funciones en sus subalternos o en otras autoridades.

Que el artículo 9 de la Ley 489 de 1998, dispone en su inciso 1 que "Las autoridades administrativas, en virtud de lo dispuesto en la Constitución Política de Colombia y de conformidad con la presente ley, podrán mediante acto de delegación, transferir el ejercicio de funciones a sus colaboradores o a otras autoridades con funciones afines o complementarias".

Que el 20 de mayo de 2016 el Presidente de la República expidió el Decreto 849 de 2016 "Por el cual se modifica la estructura del Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación - COLCIENCIAS" a través del cual además de reorganizar la entidad se establecen nuevas competencias para cada una de las dependencias de COLCIENCIAS.

Que en el marco de la nueva estructura de Colciencias desaparece la Dirección de Gestión de Recursos y Logística la cual dependía de la Subdirección General, y se crea en su lugar la Dirección Administrativa y Financiera, la cual se adscribió a la Secretaría General.

Que esta circunstancia implica la creación y modificación de las competencias dadas a estas áreas, lo que hace necesario modificar la reglamentación interna y demás disposiciones a efecto de acatar lo establecido en el Decreto 849 de 2016.

Que a través de la Resolución N° 396 de 2015 "Por medio de la cual se deroga la Resolución N° 108 de 2014 y se adoptan otras determinaciones en materia de delegación", la Directora General de COLCIENCIAS delegó la ordenación de gasto

en algunas dependencias y se adoptaron determinaciones en materia de talento humano, gestión financiera y presupuestal.

Que teniendo en cuenta lo expuesto, se hace necesario derogar la Resolución N° 396 de 2015 a efecto de acatar lo ordenado en el Decreto N° 849 de 2016 y establecer nuevamente a la luz de esta norma las competencias delegadas y en consecuencia

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- Delegar en el Subdirector (a) del Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación – COLCIENCIAS – las funciones de:

1. Celebrar contratos o convenios de mayor cuantía de la entidad, de conformidad con el presupuesto anual, independientemente de la fuente de recursos, las normas que soportan el proceso de contratación o de la modalidad de selección, así como las adiciones de estos contratos.
2. Expedir los actos de apertura de las convocatorias públicas, invitaciones directas o sus equivalentes, así como los términos de referencia o de invitación y la lista de elegibles o banco de financiables preliminares o definitivos o sus equivalentes.
3. Suscribir las adendas de modificación de los términos de referencia de las convocatorias, previa aprobación del Comité de Subdirección.
4. Suscribir los actos administrativos pertinentes para el cabal desarrollo de las convocatorias.
5. Celebrar los contratos o convenios, cartas de intención o memorandos de entendimiento que no impliquen erogación de gasto.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Delegar en el Secretario General del Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación COLCIENCIAS -, las funciones de:

En materia de gestión contractual:

1. Celebrar contratos o convenios cuyo presupuesto vaya desde la mínima y que no supere la mayor cuantía de la entidad, de conformidad con el presupuesto anual, independientemente de la fuente de recursos, las normas que soportan el proceso de contratación o de la modalidad de selección, así como las adiciones de estos contratos.
2. Proferir el acto administrativo de justificación de la contratación directa de los contratos cuando a ello hubiera lugar.
3. Proferir el acto administrativo de apertura del proceso de selección de que se trate.



4. Dirigir las etapas del proceso precontractual y suscribir todos los documentos que surjan en desarrollo del proceso, inclusive el acto de adjudicación de la contratación, con independencia de la cuantía de que se trate.
5. Representar a Colciencias en las audiencias que se adelanten en los diferentes procesos de selección de contratistas, en el desarrollo de la ejecución de los contratos y en la etapa de liquidación.
6. Aprobar las garantías que se constituyan a favor de la entidad derivadas de los contratos o convenios que ésta celebre.
7. Suscribir prórrogas, modificaciones y liquidaciones bilaterales o unilaterales de los contratos o convenios que se suscriban en la entidad con independencia de la cuantía y los demás actos necesarios en desarrollo del proceso de contratación.
8. Adelantar la actuación administrativa y proferir los actos administrativos para la declaración de incumplimiento, caducidad, imposición de las multas y sanciones pactadas en los contratos, y hacer efectiva la cláusula penal, de acuerdo con lo previsto por el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 o la norma que lo modifique, aclare o reemplace.
9. Resolver los recursos interpuestos contra los actos administrativos con ocasión de la gestión contractual que le sean encargados por la Directora General.

Parágrafo: Los estudios previos que soporten la contratación a la que aluden las delegaciones anteriores deberán estar firmados por el responsable del área que requiere el bien, servicio u obra.

En materia de gestión del talento humano:

1. Posesionar a los servidores públicos de la entidad, con excepción de los del nivel directivo y asesor.
2. Realizar los encargos y prórrogas de los servidores públicos de carrera administrativa de la entidad.
3. Realizar los encargos y prórrogas de nombramientos provisionales de servidores públicos de la entidad.
4. Adelantar todas las gestiones y suscribir todos los actos administrativos relativos a las vacaciones de los servidores públicos de la entidad.
5. Suscribir certificaciones y demás documentos relacionados con trámites pensionales de los servidores públicos de la entidad.
6. Autorizar el trámite y pago de la nómina de los servidores públicos de la Entidad, así como los aportes a la Seguridad social, parafiscales y pago de cesantías e intereses a las cesantías.

En materia de Centro de Contacto:

1. Establecer las directrices a seguir en materia de atención oportuna de derechos de petición.

ARTÍCULO TERCERO.- Delegar en el (a) Director (a) Administrativa y Financiero del Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación COLCIENCIAS -, las funciones de:

1. Ordenar el gasto de las cajas menores, de los viáticos y realizar su correspondiente legalización.
2. Ordenar, previa comunicación y visto bueno de la Directora General, los traslados presupuestales necesarios, con el fin de atender necesidades con cargo al rubro de funcionamiento de la entidad y atendiendo al presupuesto anual liquidado según la ley de apropiaciones. Se exceptúa de esta facultad los traslados y demás trámites presupuestales que se atiendan con cargo al rubro de inversión.

ARTÍCULO CUARTO.- Delegar en el (a) jefe de la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones TICS del Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación COLCIENCIAS -, la función de:

1. Administrar los sistemas información, equipos, redes y herramientas tecnológicas y brindar el soporte técnico para su funcionamiento adecuado, coordinando lo pertinente.

ARTÍCULO QUINTO.- La presente resolución rige a partir de su fecha de expedición y deroga la Resolución N° 396 de 2015.

Dada en Bogotá, D.C., a los 07 días de junio de 2016.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE,

07 JUN. 2016


YANETH GIHA TOVAR
Directora General

Elaboró: cquintero/lmzapata
Revisó y aprobó: lmzapata